



UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”



ESCUELA DE POSTGRADO

**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN
DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

**EL ARTÍCULO 108-B DEL CÓDIGO PENAL INCORPORADO
POR LA LEY N° 30068 SOBRE FEMINICIDIO Y LA
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.**

TESIS

**PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO EN DERECHO MENCIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ PONCE

ASESOR:

Dr: MIGUEL A. ARANA CORTEZ

**LAMBAYEQUE – PERÚ
2018**

**EL ARTÍCULO 108-B DEL CÓDIGO PENAL INCORPORADO POR LA LEY
N° 30068, SOBRE FEMINICIDIO Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE
IGUALDAD ANTE LA LEY**

Bach. José Agustín Rodríguez Ponce
AUTOR

Dr: Miguel A. Arana Cortez
ASESOR

**Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo para optar el grado de Maestro en Derecho, con
mención en Derecho Constitucional y Gobernabilidad**

APROBADO POR:

Dr. José María Balcazar Zelada
Presidente del Jurado

Dr. Amador Mondoñedo Valle
Secretario del Jurado

Dr. Ricardo Ponte Durango
Vocal del Jurado

Lambayeque, diciembre del 2018

Dedicatoria

A mi padre Agustín, mi esposa Teresa y mis hijos Jackeline y José.

AGRADECIMIENTO

A mis profesores del pregrado y post grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

INDICE

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	12
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA	12
1.1.1. En el contexto internacional.....	18
1.1.2. En el contexto nacional.....	21
1.1.3. En el contexto regional	24
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	25
1.3. OBJETIVOS	26
1.3.1. Objetivo general.....	26
1.3.2. Objetivos específicos	26
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA	26
1.4.1. Justificación.....	26
1.4.2. Importancia	27
1.5. HIPÓTESIS.....	28
16.Variables.....	28
CAPÍTULO II.MARCO TEÓRICO	30
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	30
2.1.1. En el contexto internacional.....	30
2.1.2. En el contexto nacional.....	31
2.2. BASE TEÓRICO – CIENTÍFICA.....	33
2.2.1. Femicidio: Definición	33
2.2.2. La igualdad ante la Ley: Principio y Derecho fundamental Constitucional	41
2.2.3. Garantías constitucionales del proceso penal	48
2.2.4. Teorías criminológicas.....	52
2.2.5. Teorías Humanistas.....	55
2.2.6. Marco Normativo Internacional	59
2.2.7. Legislación	109
2.2.8. Legislación internacional	114
2.2.9. Jurisprudencia	126

CAPÍTULO III	128
MARCO METODOLÓGICO	128
3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	128
3.1.1. Tipo de investigación	128
3.1.2. Diseño de investigación	128
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	128
3.2.1. Población.....	128
3.2.2. Muestra	129
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	129
3.3.1. Técnicas	129
3.3.2. Instrumentos	130
3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS	131
CAPÍTULO IV.....	132
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	132
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.	132
4.1.1. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos	132
4.1.2. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos	133
Tabla N° 2 Acoso sexual que sufren los hombres en relación a las mujeres	133
4.1.3. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos	134
Tabla N° 3 Homicidio contra un hombre cuyo agente es su pareja ..	134
4.1.4. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos	135
4.1.5. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos	136
Tabla N° 5 Igualdad ante la Ley para el grupo LGBT respecto a penas de homicidio en comparación al feminicidio	136
4.1.6. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos	137
Tabla N° 6 Propuesta modificatoria que brinda igualdad al hombre, respecto a la pena impuesta por feminicidio.	137
4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	138
4.3. PROPUESTA	140
4.3.1. PROPUESTA LEGISLATIVA.....	140
CONCLUSIONES	144

RECOMENDACIONES	148
BIBLIOGRAFÍA	149
ANEXOS	155
ANEXO 1 CUESTIONARIO	155
ANEXO 2. TOMAS FOTOGRÁFICAS A PERSONAS ENTREVISTADAS.....	156
ANEXO 3 NOTICIA PERIODÍSTICA.	158
UNA MUJER ARROJÓ PETRÓLEO E INTENTÓ QUEMAR A SU PAREJA EN CHICLAYO.....	158

RESÚMEN

El trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer *una iniciativa legislativa, modificatoria del artículo 108-B de la Ley N°30068 sobre feminicidio del Código Penal, que reivindique los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer*. Como hipótesis se tuvo que si se propone y aplica una medida legislativa que modifique el artículo 108-B del Código Penal, entonces se reivindicará los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer afectada por este artículo de la Ley N°30068, ley de feminicidio, en cuanto pena.

El tipo de investigación fue cuantitativa, no experimental, perteneciente al enfoque empirista, positivista, con diseño aplicada, descriptivo propositivo, transeccional o transversal. La muestra fue por conveniencia de 20 individuos, se analizó jurisprudencia, se empleó un cuestionario con 6 preguntas tipo cerradas las cuales se administraron en forma directa a jueces, fiscales y abogados, los datos se procesaron mediante el programa estadístico Megastat 24. Como conclusiones se tuvo: existe vulneración del principio de igualdad, en la normatividad expresada en el artículo 108-B de la Ley N° 30068 contenida en el Código Penal Peruano, respecto a los derechos del varón, los cuales están amparados por distintas herramientas jurídicas nacionales e internacionales.

Palabras clave: Feminicidio, femicidio, vulneración, derechos fundamentales, igualdad ante la ley

SUMMARY

The objective of the research work was to propose a legislative initiative, amending article 108-B of Law N°. 30068 on feminicide of the Criminal Code, which vindicates the rights of men to equality with women. As a hypothesis, if a legislative initiative that modifies Article 108-B of the Criminal Code was proposed and applied, then the rights of equality of man against the woman affected by this article of Law N°. 30068 law of femicide, as punishment.

The type of research was quantitative, not experimental, pertaining to the empiricist, positivist approach, with applied design, descriptive, propositive, transectional, transversal. The sample was for convenience of 20 individuals, jurisprudence was analyzed, a questionnaire was used with 6 closed type questions which were administered directly to judges, prosecutors and lawyers, the data were processed through the Megastat 24 statistical program. had: violation of the principle of equality, in the regulations expressed in Article 108-B of Law N°. 30068 contained in the Peruvian Criminal Code, regarding the rights of men, which are protected by different national and international legal tools.

Key words: Femicide, femicide, violation, fundamental rights, equality before the law

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. (Amnistía Internacional 2004).

Por tanto, la violencia contra la mujer es un problema mundial, histórico y estructural. A lo largo de la historia se ha podido constatar que la mujer cumple un rol determinado socialmente; es decir, que se ha ido construyendo una realidad donde lo femenino es inferior a lo masculino. Además, la violencia contra la mujer se inscribe en el plano de los significantes colectivos, por lo que se han desarrollado y sedimentado en los imaginarios sociales prácticas discriminatorias que violentan la integridad física y psicológica de las mujeres. Aunque las culturas –por su dinamismo– cambian, la violencia ejercida contra la mujer por razón de su género se mantiene como un persistente y grave problema mundial que afecta diariamente a millones de mujeres en el mundo.

En consecuencia, este problema no puede ser asumido de manera aislada como situaciones que se desencadenan únicamente entre determinadas personas, culturas o comunidades. Lamentablemente, constituye una grave violación a los derechos humanos, al punto que sobrepasa las fronteras, los niveles económicos y sociales y las creencias religiosas; todo ello conduce a que la mujer no sea asumida como sujeta de derechos, por lo que colectivamente se va legitimando y tolerando la violencia ejercida hacia ella.

No obstante; con la nueva Ley N°30068 Ley de Feminicidio en el Perú, se pretende proteger a la mujer, sin embargo vulnera el principio de igualdad de los derechos del hombre frente a la mujer.

La Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la igualdad, cuyo

artículo 2 inciso 2, determina: “Toda persona tiene derecho: (...) A la *igualdad ante la ley*. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”, lo que significa que estamos frente a un derecho fundamental y no puede interpretarse de forma literal contraria, pues no consiste en la facultad de las personas de exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.

La igualdad como principio es uno de los pilares del orden constitucional, lo que permite la convivencia armónica en sociedad, es también principio rector del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos, el cual vincula de modo general y se proyecta sobre el ordenamiento jurídico, pero la aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues no todo trato desigual constituye discriminación, sino aquellas desigualdades que carezcan de justificación objetiva y razonable, por tanto un trato desigual no vulnera el principio de igualdad si se establece sobre bases objetivas y razonables.

La igualdad como derecho fundamental es el reconocimiento de un derecho subjetivo es decir la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, pues el “derecho a la igualdad ante la ley”, prevista en el art. 2 inc. 2, de la Constitución quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma; y que dicha igualdad contiene un mandato derivativo de aquel, que es la *prohibición de discriminación* en cuanto constituye *el derecho a no ser discriminado* por razones proscritas por la propia constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (motivo de cualquier otra índole), que jurídicamente resulten relevantes, derecho que se traduce en una exigencia individualizable que el individuo puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele.

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Realidad problemática

El Observatorio de Criminalidad, según la Gerencia General, del Ministerio Público(2017) es un órgano técnico adscrito a la Fiscalía de Nación que se encarga de sistematizar, analizar y difundir información sobre la criminalidad, las infracciones a la ley penal y la violencia en el Perú, proporcionando información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño, implementación y evaluación de las políticas de prevención, persecución inteligente del delito y protección de la víctima.

Esta información está orientada al fortalecimiento de la política institucional del Ministerio Público ya que la información es proporcionada por los fiscales y por los órganos de apoyo a nivel nacional, y una vez que ha sido analizada y sistematizada, es puesta a disposición de la Fiscalía de la Nación y de los fiscales de los 32 distritos judiciales. Del mismo modo, la información es difundida entre diversas entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, cuyas funciones u objetivos están vinculados a la seguridad ciudadana. (Ministerio Público,2017).

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público fue creado el 15 de julio de 2005 mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro 1485-2005-MP-FN, integrando los sistemas del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), del Instituto de Medicina Legal "Leónidas Avendaño Ureta", de la Escuela del Ministerio Público "Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel" y del Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF), con la finalidad de promover el desarrollo de una red de información objetiva, confiable, oportuna y comparable que contribuya al diseño e implementación de políticas y programas que permitan combatir los

fenómenos criminales y de violencia que impactan en el Perú. (Ministerio Público,2017).

Esta organización inicial del Observatorio de Criminalidad se ha ido adaptando y especializando en función a las líneas de trabajo establecidas por la Fiscalía de la Nación y a los requerimientos de información del Ministerio Público.

El Distrito Judicial de Lambayeque, es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Chiclayo y su competencia se extiende a las tres provincias que conforman la Región Lambayeque las provincias de Jaén, Cutervo y San Ignacio.

Fue creada por la Ley N° 4049 y se instaló el 4 de Mayo de 1920 bajo la presidencia de Augusto B. Leguía

Consta de tres Salas Penales, dos Salas Civiles, una Sala Laboral y una Sala Mixta. (Ministerio Público,2017).

El objeto de estudio de la presente investigación es la Ley 30068 Artículo 108-B y la vulneración del principio de igualdad de los derechos del hombre frente a la mujer.

Según Copello, (2006) Desde que la violencia contra las mujeres saliera del ámbito privado para convertirse en un asunto de interés público ampliamente difundido por los medios de comunicación, el legislador enfocó el problema a partir de su calificación como un caso más de maltrato familiar. Así lo expresó con toda claridad con motivo de la inclusión del primer delito de violencia habitual en España en el año 1989, al justificar la nueva figura como un instrumento destinado a proteger “a los miembros físicamente más débiles del grupo familiar frente a conductas sistemáticamente agresivas de otros miembros del mismo”. (p.2).

Muy pronto la jurisprudencia recogió el testigo que le entregara el legislador penal y se inclinó por centrar la mirada en la “preservación del ámbito familiar como una comunidad de amor y libertad presidido por el respeto mutuo y la

igualdad”, explicando la razón de ser del delito de maltrato habitual como un mecanismo adecuado para la tutela de “la paz familiar”, seriamente afectada por unos actos violentos “que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un microcosmos regido por el miedo y la dominación”, dañando así el primer núcleo de toda sociedad como es el núcleo familiar.

A partir de estas ideas iniciales, y con el apoyo que supuso la desmedida ampliación del círculo de sujetos pasivos a través de las diversas reformas del delito de violencia doméstica, la jurisprudencia ha ido consolidando una doctrina que definitivamente sitúa el motivo de la tutela penal reforzada en la necesidad de proteger la dignidad de las personas que forman parte del núcleo de la vida doméstica –u otras situaciones asimiladas- y, sobre todo, de dar protección a la familia como institución reconocida y amparada por nuestro ordenamiento constitucional. Copello, (2006)

Según Copello, (2006) Tampoco han faltado voces en el panorama doctrinal que, con fundamentos diversos, erigen a la propia “unidad familiar” en el sujeto pasivo del delito de violencia habitual, configurando así una especie de bien jurídico supraindividual que quedaría vinculado a los deberes jurídicos de protección y asistencia mutua que surgen de las relaciones familiares. De esta manera, un delito que se creó al calor de la creciente preocupación social por la proliferación de actos de violencia extrema contra las mujeres nació desde el principio claramente desenfocado, apuntando al contexto dentro del cual suele manifestarse este tipo de violencia antes que a las auténticas causas que la generan.(p.3).

Basta una rápida mirada a la amplia relación de sujetos pasivos contenida en el artículo 173.2 CP y a la inabarcable literatura que esta figura delictiva ha generado, para comprender que la estrategia político criminal ha discurrido por caminos muy diferentes a los que cabía esperar a la vista de una realidad tozuda que día a día señala a la mujer como víctima preferente de los actos violentos relacionados con la pareja. Pese a los datos abrumadores en este sentido, todo el sistema penal parece empeñado en dejar a la mujer en un segundo plano, para buscar la causa de este tipo de violencia en un contexto mucho más amplio

dentro del cual ella aparece como una víctima más de una larga lista de potenciales afectados.

De modo menos ingenuo del que a primera vista pudiera parecer, tanto el legislador –al menos hasta 2003- como la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria coinciden en situar la razón última de este tipo de violencia en las relaciones de subordinación que tienen por causa la convivencia en el ámbito doméstico u otros asimilados o, lo que es igual, en la especial vulnerabilidad que se deriva de determinadas relaciones familiares o cuasi familiares, sea por existir una dependencia jurídica entre víctima y agresor – patria potestad, tutela, curatela, etc.-, sea por la posición fáctica de debilidad que ocupa la víctima respecto del autor por causas diversas –edad avanzada, incapacidad, etc. (Copello, 2006)

En otros términos: las causas de la violencia se buscan en la propia naturaleza de las relaciones familiares, cuyas características de subordinación y dependencia vendrían a favorecer una posición de dominio de ciertos miembros del grupo familiar sobre otros y la correlativa indefensión de estos últimos. De ahí el predominio del término “violencia doméstica”, sin duda muy adecuado para designar ese amplio fenómeno al que desde el mismo nacimiento del primer delito de malos tratos se ha orientado la respuesta del Derecho penal.

Sin embargo, como bien ha destacado Asúa, se da la paradoja de que quien menos encaja en esta perspectiva tuitiva centrada en las relaciones familiares de sujeción y vulnerabilidad es precisamente la mujer, ya que en su caso no hay razones jurídicas ni menos aún naturales que la releguen a una posición de dependencia o subordinación en el contexto doméstico. *Al contrario, la ley le reconoce plena igualdad con su pareja y, salvo casos excepcionales que nada tienen que ver con el sexo, sus características físicas y psíquicas no permiten calificarla como un ser “naturalmente” débil.* Su situación no es asimilable, en consecuencia, a la de los niños, ancianos o incapaces que, por sus propias condiciones ocupan una posición de partida necesariamente subordinada en el ámbito de la familia.

Estos miembros del grupo doméstico son naturalmente vulnerables; de acuerdo a Copello (2006) a la mujer, es el agresor quien la hace vulnerable a través del ejercicio de la violencia. La vulnerabilidad de la mujer no es consustancial a

su posición jurídica dentro de la familia ni tampoco a sus condiciones personales, sino que es el resultado de una estrategia de dominación ejercida por el varón - al amparo de las pautas culturales dominantes- para mantenerla bajo su control absoluto. Por eso, *la causa última de la violencia contra las mujeres no ha de buscarse en la naturaleza de los vínculos familiares sino en la discriminación estructural que sufren las mujeres como consecuencia de la ancestral desigualdad en la distribución de roles sociales.* (p.4).

La posición subordinada de la mujer respecto del varón no proviene de las características de las relaciones familiares sino de la propia estructura social fundada todavía sobre las bases del dominio patriarcal. Bien es verdad que, en la práctica, es en el contexto doméstico donde con mayor frecuencia se manifiesta este tipo de violencia. Porque es allí donde adquieren más intensidad las relaciones entre hombre y mujer.

Pero eso no significa que la familia sea la causa de la violencia de género. También las agresiones sexuales o el acoso laboral son manifestaciones de este fenómeno y nada tienen que ver con el contexto familiar. De ahí lo inapropiado de identificar violencia de género con violencia doméstica. Aunque emparentados, se trata de fenómenos diferentes, debidos a causas distintas y necesitados de respuestas penales autónomas. La confusión de ambos conceptos ha conducido a que la violencia contra las mujeres quede diluida entre otras muchas manifestaciones de agresividad originadas en causas ajenas al sexo de la víctima, dando lugar a una respuesta desenfocada del Derecho penal no carente de peligrosos efectos prácticos.

Copello, (2006) comenta que las referencias a la institución familiar como objeto de tutela abonan la idea de que el maltrato que sufren las mujeres a manos de sus parejas constituye un problema esencialmente privado –“doméstico”- que sólo en casos extremos justifica la intervención de terceros ajenos al núcleo familiar. Se fomenta así uno de los prejuicios culturales que en mayor medida han obstaculizado la persecución de la violencia de género, convirtiéndola en un asunto de familia que el propio grupo está llamado a resolver. Pero, además, se justifican por esta vía ciertas alternativas destinadas a “salvar” a la institución familiar, como sucede con las propuestas partidarias de conceder un espacio a

la mediación entre los miembros de la pareja antes de acudir a la vía penal, solución ésta que sólo consigue incrementar el sentimiento de culpa tan característico de las mujeres maltratadas en lugar de facilitarles la conquista de su autonomía personal y la definitiva liberación del maltratador. (p.7).

Munevar, (2012) La observación atenta de la recurrente muerte violenta de mujeres como una realidad innegable está siendo traducida a estadísticas. Con un trabajo arduo, investigadoras sociales, analistas de género y juristas feministas procuran un cuidadoso seguimiento para hacer visibles (y registrar con números) las violencias de género, configurar bases de datos definidos con precisión, documentar los casos en el ámbito criminal y territorializar los hechos, a fin de orientar la investigación penal cuestionando la impunidad y aportando elementos para impartir justicia.(p.139).

Los análisis feministas y de género interrogan la base de los postulados de neutralidad, universalidad y objetividad de la ciencia, los cuales también circulan en los procesos de tipificación del delito de femicidio. Haciendo uso del concepto de femicidio, las muertes violentas de mujeres han sido descritas por Diana Russell en solitario, quien plantea una definición para abarcar todas las formas de asesinato sexista, con Jill Radford o con Jane Caputi. Estas autoras han afianzado diversos intentos analíticos para elaborar conceptos tejidos a partir de la realidad vivida.

De acuerdo a Munevar, (2012) la clasificación proporcionada por estas estudiosas incrementa los debates conceptuales en los complejos ámbitos de la garantía de los derechos humanos de las mujeres: femicidio íntimo cometido por hombres cercanos a las mujeres asesinadas por tener o haber sostenido una relación íntima, un vínculo familiar o una situación de convivencia; femicidio no íntimo cometido por hombres sin una historia de relaciones cercanas a las mujeres cuya integridad ha sido objeto de un ataque sexual previo a la muerte; y femicidio por conexión cometido por hombres que matan a mujeres diferentes de su objetivo femicida por hallarse en la línea de fuego, al intervenir en defensa de la víctima. (p.148).

Julia Monárrez, en México, ha estudiado la situación de Ciudad Juárez para descifrar los móviles y las características de los asesinatos de ciertas mujeres

junto a la impunidad creada y sostenida por el Estado ante el creciente número de muertes, materializada en la ausencia de investigación para estos casos, la imposición de obstáculos para acceder a la justicia y la consecuente falta de acciones estatales para la reparación de los daños causados; ella propone el femicidio y lo diferencia de los asesinatos sin motivaciones de género, además realiza una agrupación con base en las fuentes analizadas: femicidio familiar (íntimo e infantil), femicidio sexual sistémico (organizado o desorganizado) y femicidio por ocupaciones estigmatizadas (realizadas por mujeres).

Carcedo y Sagot, (2012) en Costa Rica, se han detenido en las particularidades de los femicidios registrados en este país centroamericano. Como sociólogas que combinan la investigación académica (focalizadas en violencias de género) y el activismo político feminista (haciendo trabajo directo con grupos de mujeres), ellas han documentado en colectivo las vivencias individuales para afirmar que es urgente e impostergable hacer el reconocimiento de los estragos provocados en la vida de las mujeres por la violencia, ejercida por los hombres; esto significa que la meta política feminista pasa por nombrar, visibilizar y conceptualizar los alcances de tales estragos teniendo en cuenta tres tipos penales: femicidio íntimo, femicidio no íntimo y femicidio por conexión; y sin olvidar los grandes vacíos de información que ellas mismas encontraron, y denunciaron, en las fuentes oficiales que registran datos relativos a las muertes violentas de mujeres. (p.149).

1.1.1. En el contexto internacional

Según datos oficiales de la CEPAL,(2015) 1678 mujeres fueron asesinadas por su condición de tal en catorce países de América Latina y tres del Caribe en 2014. De igual forma, entre 2008 y 2015, catorce países tienen leyes de femicidio o feminicidio y dos países leyes de homicidio agravado por razones de género (Argentina y Venezuela).

Según Lisardi, (2013), en el caso de México siete de cada diez han sido víctimas de violencia. En otros países son cinco de cada diez y en otros ocho.

La violencia se manifiesta en muchas formas: incluye la psicológica, la económica... Es la forma más fuerte de discriminación y violación de los

derechos humanos. Es el gran problema que tienen las mujeres para realmente estar en pie de igualdad con los hombres. El feminicidio es como la suma de todas las violencias. O sea, la violencia acaba en feminicidio. Es como la muestra de lo más grave que hay.

Que haya violencia contra las mujeres es un problema para el desarrollo y la seguridad nacional. Porque no podemos hablar de que tenemos un país con gran seguridad cuando las mujeres no pueden estar en su casa tranquilas y ahí las empiezan a golpear.

La seguridad empieza en la casa, sigue en la calle, el trabajo, la escuela. Y si usted está violentando a las mujeres en todas esas etapas, no tiene una sociedad con seguridad ciudadana o derechos humanos.

¿Cómo se explica que América Latina tenga estadísticas más altas que otras regiones?

Esto procede de lo que son las relaciones desiguales de género, de poder: esa idea ancestral de que los hombres son superiores a las mujeres, esos estereotipos que están muy extendidos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2014) En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

- Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80% y el Estado de México el 78 por ciento.
- 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.
- La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento).

- Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6%), que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).
- 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual.
- En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.
- En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.
- Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.

Según Diario El Clarín, (1998)

Una mujer fue detenida ayer en Belgrano acusada de asesinar a su marido prendiéndolo fuego tras rociarlo con alcohol. La Policía detuvo a Ana María Morou, de 55 años, en su departamento de Federico Lacroze al 2200. Seguía viviendo en el mismo lugar donde su marido, Miguel Ángel Celcio, que se movilizaba en una silla de ruedas, fue calcinado el 6 de junio del año pasado. La mujer se sorprendió por la detención. Se vé que como pasó un año pensaba que ya no iba a pasar nada, dijo a Clarín uno de los policías que investigaron el caso. Morou trabajaba en la escuela técnica Mariquita Sánchez de Thompson, del barrio donde está su casa. Desde la muerte de su marido tenía licencia por recomendación psiquiátrica. Mala relación. Según surgió de la investigación del caso, la mujer habría matado a su marido después de mantener con él una fuerte discusión. Pudimos comprobar que la relación de la pareja era muy mala desde hacía bastante tiempo, dijo una fuente policial. Para los investigadores, la mujer, en medio de los gritos, le arrojó encima a su marido una botella de alcohol, y después le prendió fuego con un fósforo. Celcio no pudo defenderse: tenía mal de Parkinson y se desplazaba en una silla de ruedas porque no podía mover una

pierna. Por el fuego sufrió graves quemaduras y fue internado en un sanatorio. Murió tres días después. Cuando declaró ante la Policía, la esposa de la víctima dijo que se había tratado de un accidente.

Aseguró que un cortocircuito en el cable de un equipo de audio había provocado un incendio que alcanzó a su marido. Los investigadores, en un principio, aceptaron la explicación de la mujer. Pero un tiempo después un hijo de la pareja fue a ver al juez de la causa para decirle que sospechaba que su padre había sido asesinado. En ese momento comenzó una investigación que avanzó con paso lento. Hace dos semanas el juez dio intervención a la división Homicidios de la Policía Federal, que ayer detuvo a la mujer. Indicios. Según explicaron fuentes de la investigación, hubo varios indicios que fueron inclinando las sospechas hacia Morou. Uno de ellos fue la pésima relación que tenía con su marido. Las pericias que se hicieron en el departamento arrojaron un dato clave: el cable del equipo de música que según la mujer había entrado en cortocircuito, en realidad se había quemado desde afuera hacia adentro. Eso quiere decir que el fuego no salió del mismo cable, sino de otro sector del departamento. Y hubo un elemento más. Al analizar los llamados que Morou hizo el día del crimen, los investigadores pudieron establecer que la mujer había llamado a la ambulancia recién una hora después de que su marido había resultado gravemente herido por el fuego. Con todos esos elementos en la causa, el juez ordenó la detención de Morou, que hoy podría ser indagada como imputada por el asesinato de su esposo.

1.1.2. En el contexto nacional

En el contexto nacional, las cifras sobre la violencia de género en nuestro país, en lo que va del año, fueron reveladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Entre enero y marzo, se han registrado 29 feminicidios y 58 tentativas. En comparación con el 2016, cuando se contabilizaron 124 feminicidios y 258 tentativas a través de sus Centros de Emergencia de la Mujer.

Según El Ministerio Público, citado por El Diario La República (9 de marzo de 2017) en su artículo: *Balance de violencia contra la mujer 946, feminicidios en 8 años*. El resultado es alarmante: 946 casos de mujeres (algunas menores)

asesinadas por sus parejas o ex parejas entre enero del 2009 y diciembre del 2016. Y los números más altos los tienen los distritos fiscales de Lima (Cercado), Junín y Lima Norte, con 108, 80 y 62 casos, respectivamente.

Se considera muy acertada la modificatoria del artículo 108-b de la ley 30068, ley de feminicidio, al aumentar el quantum de la pena y otros agravantes pues la mujer no debe ser lastimada, maltratada, menos víctima de feminicidio. Sin embargo considero que al mismo tiempo este dispositivo legal vulnera el principio constitucional de derecho a la igualdad del hombre frente a la mujer.

Los hombres aunque en menor medida, también sufren maltrato físico, psicológico; acoso laboral, acoso sexual, muchos son víctimas de maltrato intrafamiliar por parte de su pareja, la diferencia es que estas víctimas, justamente por vivir en la sociedad machista en que vivimos son pocos lo que denuncian esos maltratos y si se atreven a presentar denuncia en la policía no son de buena manera aceptados, por el contrario son a veces objeto de burla, creando una situación de invisibilidad.

Esta conducta se manifiesta diariamente pero no denunciados, veamos algunos reportes:

Panamericana (2018) En Huancayo, un hombre fue quemado por su pareja, todo durante un altercado con su esposa

Esta última le roció gasolina por todo el cuerpo y le prendió fuego. El salvaje ataque ocurrió en el Caserio denominado “Naranjillo” en el distrito de Campo Verde en Pucallpa. Tras el ataque, el hombre que es comerciante de papayas pidió ayuda y fue trasladado a un hospital. A la mujer no le importó la discapacidad de su pareja y le prendió fuego. Se trata de Sonia Surichahui quien es acusada de maltratar a su esposo y a su pequeña hija. La hermana del hombre quemado presentó una denuncia contra la mujer que le roció gasolina en la silla de ruedas donde se encontraba su hermano.

La víctima de este ataque fue identificado como Juan Ruiz Saqui de 40 años quien quedó con quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo. Los vecinos del lugar indican haber sido testigos de los constantes maltratos que sufre por parte de la esposa.

A continuación se presenta el estado de la cuestión de los programas o servicios que ha implementado el Estado, con el fin de conocer las características e incidencia del feminicidio consumado o en grado de tentativa y, aunque todavía de manera limitada, intervenir para prevenirlo.

1.1.2.1. Los registros de casos de feminicidio y tentativas de feminicidio en Perú

En el Perú, se cuenta con dos registros de Feminicidio, uno a cargo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el segundo a cargo del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.

1.1.2.2. El Registro de feminicidio y tentativa de feminicidio del MIMP

El registro de víctimas de feminicidio del MIMP 120, fue creado con el fin de dotar de información para el diseño de estrategias eficaces para la atención de las víctimas y sus familias a través de sus servicios; así como, orientar la articulación con otros servicios del sistema de protección y sanción.

De acuerdo al artículo 2 de la Resolución Ministerial 110-2009-MIMDES, para el registro de víctimas de feminicidio se utilizarán diversas fuentes de información oficial del ámbito nacional, regional y local. Asimismo, se deberá considerar y evaluar la información de carácter no oficial que sea de su conocimiento.

El registro deberá consignar un rubro especial los casos de tentativa de feminicidios.

Esta labor es encomendada al personal de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), quienes como promotores se encargan de la captación y ampliación de la noticia, y el personal de las áreas Legal y Social de la validación de los casos de feminicidio y tentativa —que incluye la indagación en la comisaría o fiscalía— a fin de determinar la existencia del caso; luego, con la información disponible, se establece si el caso es feminicidio o tentativa, o no lo es. Los casos así validados son registrados en la base de casos de feminicidio y tentativa, para luego proceder con la atención y seguimiento a las víctimas de tentativa o a los deudos de la víctima de feminicidio.

Las estadísticas sobre feminicidio y tentativa de feminicidio que el Registro del MIMP ha presentado desde el año 2009, se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

Registro de homicidios del MIMP-2009-2015

Año	2009-2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
FEMINICIDIO	260	93	83	131	96	71	734
TENTATIVA DE FEMINICIDIO	111	66	91	151	186	148	753

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

FUENTE: Resumen estadístico de Violencia feminicida, Período 2009-Set 2015

* Registro de víctimas con características de feminicidio-PNCVES /MIMP

** Registro de casos y atenciones en los Centros Emergencia Mujer-PNCVES/MIMP

1.1.3. En el contexto regional

En la región Lambayeque, la problemática acontece en similar situación. En Chiclayo, se viralizó un vídeo donde una mujer hecha gasolina a su marido y trata de prenderle fuego con fósforos que tenía a la mano, este intento de homicidio ocurrió a plena luz del día, la mujer quedó libre.

En el contexto regional, según Radio programas de Perú (18 octubre de 2014) en una entrevista realizada a Calderón, especialista en temas de desarrollo, indicó que existen en la región Lambayeque alrededor de 150 organismos no gubernamentales (ONG), pero no todas habilitadas y registradas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El activismo en las ONGs se ha debilitado porque hay menos oportunidades de acceder a proyectos por la carencia de fondos

Calderón, manifestó que en Chiclayo, la primera ONG fue el “Centro de Estudios Sociales Solidaridad” fundada en 1980, que tiene vínculos a nivel nacional con otras redes en temas de desarrollo de capacidades, ciencia política, y defensa de derechos humanos, siguiendo un organismo feminista llamado “Grupo Mujer”, pero que actualmente ya no existe.

La especialista precisó que uno de los obstáculos que tienen estos organismos no gubernamentales tanto en Lima, como en la región Lambayeque, es que no reciben apoyo del Apci, porque hay una imagen que el Perú esta económicamente bien y por eso los fondos internacionales están direccionados a países más pobres o con debilidades democráticas como el caso de África.

En el planteamiento del problema se observa que artículo 108-B del Código Penal incorporado por la Ley 30068, presenta ciertos vacíos, ciertas debilidades como discriminación del trato por parte del juzgador del hombre frente a la mujer que estaría generando como efecto:

-Minusvalía de género masculino

-Vulneración del derecho a la igualdad del hombre frente a la mujer, tan solo por el hecho de ser mujer.

-Vulneración de Convenios y tratados internacionales sobre el derecho a la igualdad

Ante lo expresado se formulan interrogantes

¿El tipo penal de feminicidio vulnera el derecho de igualdad ante la ley peruana?

¿La vida de una fémina tiene mayor valor al de un varón?

¿El legislador ha incurrido en trato desigual al elaborar el tipo penal de feminicidio?

1.2. Formulación del problema

Con las premisas anteriormente descritas la formulación del problema queda redactada en los siguientes términos:

¿De qué manera una iniciativa legislativa, modificatoria del artículo 108-B del Código Penal, reivindica los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer de la Ley N°30068 sobre feminicidio, modificada por Ley 30819?

El Objeto de estudio de la presente investigación es la Ley 30068, Feminicidio, modificada por Ley 30819 publicada en el Diario oficial El Peruano el 13 de julio

del 2018 y se justifica porque propone una modificatoria legislativa en cuanto pena, del artículo 108-B, del Código Penal que reivindique los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Proponer una iniciativa legislativa, que modifique el artículo 108-B del Código Penal incorporada por Ley N°30068 feminicidio, modificada por Ley 30819, y reivindique los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer.

1.3.2. Objetivos específicos

Analizar la Ley 30068- feminicidio que incorpora el artículo 108-B del Código Penal y sus implicancias en derecho a la igualdad del hombre frente a la mujer.

Describir las *implicancias actuales* del artículo 108-B en cuanto derecho de igualdad del hombre frente a la mujer.

Elaborar una iniciativa legislativa, modificatoria del artículo 108-B del Código Penal incorporado por la Ley N°30068 feminicidio; modificada por Ley 30819 del Código Penal, y que reivindique los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer.

1.4. Justificación e Importancia

1.4.1. Justificación

El trabajo científico se justifica por las siguientes razones

1.4.1.1. Justificación Teórico Científica.

Se justifica porque analiza el feminicidio en cuanto las teorías criminológicas modernas, **la teoría del dominio del hecho, de Claus Roxin** la cual se reconoce como teoría dominante de la autoría y la participación, en cuanto las teorías del desarrollo humano, **al Humanismo** cuyo objeto de estudio es el Yo,

y el desarrollo pleno de las cualidades esenciales de la persona en búsqueda de la autorrealización.

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados Internacionales de derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en virtud del artículo 3, común a ambos, aseguran a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en esos documentos.

1.4.1.2. Justificación social.

Se justifica porque mediante la propuesta a presentar se pretende reivindicar los derechos a la igualdad del varón frente a la fémina, se pretende también mejorar las relaciones interpersonales, y analizar la problemática del feminicidio.

Conforme a la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° queda manifiesta tal orientación al reconocerse que *“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”*, beneficiando de esta manera a la sociedad en general.

1.4.2. Importancia

El trabajo de investigación es importante para estudiar la violencia en 2 dimensiones: la primera, hacia la mujer en todas sus manifestaciones pues vulnera sus derechos fundamentales como persona, y; en segunda dimensión, al hombre frente a la mujer debido al artículo 108-B. Ley 30819. Esto acarrea costos no solo a nivel individual sino también social.

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en virtud del artículo 3, común a ambos, aseguran a

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en esos documentos.

El trabajo es también importante para que sirva como antecedente de estudio de futuras investigaciones.

El campo de acción fue el Artículo 108-B *de la Ley N°30068 feminicidio*; la Ley 30819, y el Artículo 106, Homicidio simple del Código Penal.

1.5. Hipótesis

Si se propone y acepta una medida legislativa que modifique el artículo 108-B del Código Penal, entonces se reivindicará los derechos de igualdad del hombre frente a la mujer afectada por este artículo de la Ley N°30068, ley de feminicidio, en cuanto pena.

1.6. Variables

Variable Independiente: Artículo 108-B Ley 30068, Ley de Feminicidio

Variable Dependiente: Derecho a la igualdad

14

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TECNICAS INSTRUMENTOS	E	
Art 108-B Ley N° 30068, <u>feminicidio</u>	<u>Feminicidio</u> intimo	Violencia	Análisis documental		
	<u>Feminicidio</u> familiar intimo	Violencia intrafamiliar	entrevista en profundidad		
	<u>Feminicidio</u> infantil	Abuso de poder			
	<u>Feminicidio</u> sexual sistémico	Acoso sexual			
	<u>Feminicidio</u> por ocupaciones estigmatizadas	Trabajadoras sexuales			Ficha de entrevista
		Damas de compañía			
		Meseras			
		<u>Barrender</u>			
		Salaninas			
		Trabajadoras del hogar			
IGUALDAD ANTE LA LEY	- Convencion Americana de Derechos Humanos. Art° 24	Derechos:	entrevista en profundidad		
	-Pacto Internacional de Derechos Civiles y <u>Políticos</u> Art 26	Sociales, Económicos'			
	Constitucion Política del <u>Perú</u> Art 1	Políticos <u>Sexuales reproductivos</u> culturales			
	Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y <u>Hombres</u> <u>CNDH</u>		Ficha de entrevista		

15

CAPÍTULO II.MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema

2.1.1. En el contexto internacional

En España existe un trabajo de Ramos de Mello, titulada: *Feminicidio: Un análisis criminalístico-Jurídico de la violencia contra las mujeres* el objetivo fue analizar la tipificación de los delitos de feminicidio en países latinoamericanos, llegó a la conclusión que la tipificación penal del feminicidio puede no ser suficiente, considerando que en la ley penal subsiste el control patriarcal contra la mujer. Incluso así, parafraseando a Celia Amorós "conceptualizar es politizar", es decir, los conceptos críticos posibilitan la visibilización de determinados fenómenos que no se presentaban a partir de otras orientaciones y, a su vez, esta visibilidad nutre y permite nuevos conceptos críticos. Que estos conceptos estén incorporados en las instituciones, concretamente en el Derecho y en el Derecho Penal en específico, es esencial para que el problema se haga presente en la discusión pública. Dar visibilidad a los asesinatos de mujeres, al contrario de tratarlos como mero crimen pasional, elevándolo a una categoría jurídica, todavía es una cuestión pendiente, para la cual la tipificación es un paso decisivo, y que puede hacer que se produzcan cambios estructurales en nuestra sociedad permitiendo una reforma general de toda la legislación y de las políticas públicas que, expresa o tácitamente, contengan preceptos discriminatorios.

Por todo ello, la tipificación del feminicidio inaugura un nuevo momento, en que las formas de combatir la violencia contra la mujer, lejos de ser una cuestión resuelta, deben cada vez discutirse más. Para que se produzca esta discusión, resulta imprescindible precisamente la inclusión del término feminicidio en el léxico del derecho que, como vemos, es tal vez la principal contribución del nuevo sistema. Así, el justificado entusiasmo ante esta conquista no debe impedirnos que la sometamos a la crítica, que en cualquier caso resulta necesaria.

Además, aunque todo texto esté, por la naturaleza del lenguaje, sujeto a indeterminaciones que posibiliten diferentes interpretaciones, ciertas ambigüedades podrían haber sido evitadas por el legislador. Al referirse a la

violencia doméstica, por ejemplo, el texto legal parece dar margen a la interpretación según la cual una hermana que matara a otra hermana, por razones de ser ella mujer, cometería feminicidio. Una correcta interpretación de este texto, sin embargo, debía tomar en cuenta que, siendo la finalidad de la ley relativa a un crimen relacionado con el machismo y la opresión patriarcal sobre las mujeres, a lo que el texto se refiere debe ser, necesariamente, a la violencia practicada por hombres.

Una mayor concienciación de los operadores del derecho sobre la naturaleza de la violencia de género debía, así, favorecer una interpretación correcta de la disposición legal.

Hechas estas necesarias críticas, incluso para que puedan sembrar una provechosa discusión de aquí en adelante, conviene destacar que las consecuencias de la tipificación del feminicidio son, al fin y al cabo, muy positivas. Es lamentable, por supuesto, que tales debates, que podrían haberse dado antes de la tipificación y, así, haber dado lugar a una legislación más perfecta, solo se realicen retrospectivamente. Eso es, sin embargo, consecuencia de la ya repetidamente resaltada importancia de las palabras en la construcción de la realidad social. Sólo ahora que contamos, institucionalmente, con el término “feminicidio”, estas y otras discusiones irán saliendo gradualmente a la luz. Esa, por sí sola, es una razón suficiente para que festejemos como conquista la tipificación del feminicidio.

2.1.2. En el contexto nacional

Existe el trabajo de suficiencia profesional, Método de caso jurídico *El feminicidio. Expediente n° 03837-2012-CSJL-Lima caso: Lidia Maribel Mendoza Ríquez*, de Piélago (2012). El objetivo investigado fue: Analizar el expediente N° 03837-2012-CSJL-Lima.Caso: Lidia Maribel Mendoza Ríquez.Las conclusiones arribadas fueron:.

1. El homicidio de mujeres o feminicidio, como se la ha denominado, se ha constituido hoy por hoy en uno de los principales problemas que aqueja a los diferentes países del mundo. Así, los diferentes Estados han adoptado diversos mecanismos con la finalidad de combatir esta problemática social que cada día cobra víctimas inocentes que mueren inexplicablemente en manos de sujetos

que erróneamente y basándose en pensamientos discriminatorios, machistas o sexistas, creen que pueden disponer de aquellas vidas como quién dispone libremente de cualquiera de sus propiedades.

2. Este término “feminicidio”, como acepción novedosa se ha ido insertando poco a poco en el discurso criminalística y no busca otra cosa que poner en evidencia una situación de violencia sistemática y silenciada por muchos siglos por la indiferencia y tolerancia social. Es una categoría que debe abordarse como una modalidad de violencia directa hacia las mujeres, pero que deberá ser tratado con sumo cuidado y la importancia que se merece, como una alternativa a la neutralidad del término homicidio haciendo visible un trasfondo no reconocido. La idiosincrasia discriminatoria por el género, como base fundamental en la muerte diaria de mujeres.

3. La inclusión del tipo penal de feminicidio en nuestra legislación penal constituye un significativo avance en cuanto a la protección jurídica de la vida de la mujer que comparte su existencia con su pareja y, en ese sentido, representa una valorización que se hace de ella en una muestra real y plausible de un efectivo ejercicio de la tutela de sus derechos más fundamentales, como es de su propia vida.

4. El beneficio del imputado al ser sentenciado en aplicación del delito de feminicidio de conformidad al artículo 107º del Código Penal modificado por el artículo 1º de la Ley N° 29819 (publicado el 27 de diciembre de 2011), toda vez que los hechos imputados de delito de feminicidio al procesado Owen Arthur Goddard en agravio de Lidia Maribel Mendoza Riquez, fueron el 13 de febrero del 2012, la sentencia emitida el 28 de enero de 2014, sentenciado al procesado con 20 años de pena privativa de la libertad como autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud – feminicidio- en agravio de Lidia Maribel Mendoza Riquez, además fijando una reparación civil de doscientos mil nuevos monto que será abonado por el sentenciado a los herederos, por lo que no era aplicable el artículo 108 B del Código Penal por haber sido publicada por la Ley N° 30064 el 30 de junio de 2013, en estricto cumplimiento con el artículo 6º del acotado Código.

2.2. Base Teórico – Científica

2.2.1. Femicidio: Definición

Para Russel y Radford, (citado por Toledo 2009) la forma más extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”(p.24).

Según Chejter, (citado por Toledo 2009) es el “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”.(p.26).

2.2.1.1. Origen del término Femicide

Según Fregoso, (2010) El término “femicide” en inglés, fue en primer lugar utilizado en el mundo anglosajón por Diana Russell durante la celebración del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, en 1976, para testificar sobre los asesinatos misóginos. No obstante es en Latinoamérica en la década de los 80, en República Dominicana cuando, activistas feministas y grupos de mujeres utilizan por primera vez el término feminismo en sus campañas para pedir el fin de la violencia contra las mujeres en la región.

Russel (1992) reconoció que el término *femicide* no lo había creado ella sino que ya lo había oído nombrar previamente, puesto que en 1974 tuvo conocimiento de que una escritora americana, Carol Orlock, estaba preparando una antología sobre *femicide*. Sin embargo, el libro no se publicó y Russell nunca supo el significado que la autora le dio al término. (p.14).

Continúa Russel, (1992) Lagarde, fue la primera teórica que traduce la palabra *femicide* al castellano. Y lo hace usando la expresión feminicidio en vez de traducirlo literalmente como *femicidio*. Ella misma explica el motivo: considera que la palabra *femicidio* es el equivalente para las mujeres de homicidio, de tal manera que sólo significa homicidio de mujeres.(p.217).

2.2.1.2. Femicide, Feminicidio: Diferencias terminológicas:

Refiere Cladem, (2008) En la traducción del término *femicide* al castellano ha habido dos tendencias: como *femicidio* o como *feminicidio*. La diferencia entre estas dos expresiones ha sido objeto de profunda discusión a nivel latinoamericano, y la mayor parte de las investigaciones sobre este tema en la

región dedican un capítulo o sección a la distinción entre ambas, y aún en la actualidad se sostiene que no existe consenso a nivel teórico en cuanto al contenido de cada uno de estos conceptos. (p.10).

Las investigaciones producidas en Latinoamérica en los últimos años se refieren únicamente a las muertes violentas de mujeres por razones de género, ya sea bajo la denominación *femicidio* o feminicidio.(Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2008 p.12).

A pesar de que el concepto de femicidio no se gestó en América Latina, es en esta región en donde, en las últimas dos décadas, se ha producido un amplio debate sobre el concepto como efecto natural de la situación de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las mujeres y, muy especialmente, por la ineficacia del sistema de justicia para contener y reprimir la muerte de mujeres.

El debate sobre el delito de feminicidio en la región ha girado entorno a las implicaciones de su tipificación para el sistema de justicia penal, en la importancia de visibilizar el asesinato de mujeres por razones de género y sobre todo, ha puesto énfasis en la revictimización de las mujeres dentro del sistema de justicia y en la responsabilidad del Estado por la impunidad y la repetición de los hechos criminales, convirtiéndose el asesinato de mujeres en un crimen de **Estado**.

2.2.1.3. Tipología de Feminicidio

De acuerdo con el Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, (2008), la tipología de los feminicidios se describe de la siguiente manera:

2.2.1.3.1. Feminicidio Íntimo

Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, de convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o afines a éstas.

2.2.1.3.2. Feminicidio no íntimo

En esta categoría se encuentran los delitos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o

afines a éstas” (Carcedo y Sagot, 2000: 14), sin embargo, existía una relación de amistad, confianza o jerarquía, cabe decir, que son muertes perpetradas por amigos, compañeros de trabajo o incluso trabajadores del sector salud quienes se valen de la relación de confianza con su víctima.

2.2.1.3.3. Femicidio Familiar Íntimo

Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea recta o colateral hasta en cuarto grado, hermana, concubina, adoptada o adoptante, o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, sabiendo el delincuente esta relación.

2.2.1.3.4. Femicidio Infantil

Es la privación dolosa de la vida cometida en contra de niñas menores de edad [sic] o que no tengan la capacidad mental, ya sea hija descendiente o colateral hasta en cuarto grado, hermana, adoptada, que tenga alguna relación afectiva o de cuidado sabiendo el delincuente esta relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la menor.

2.2.1.3.5. Femicidio sexual sistémico

Es el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades.

2.2.1.3.6. Femicidio por ocupaciones estigmatizadas

Si bien las mujeres son asesinadas por ser mujeres, como nos (...) explica la Dra. Monárrez, hay otras que son asesinadas por la ocupación o el trabajo que desempeñan. Ellas son bailarinas, meseras o trabajadoras sexuales. Aunque son agredidas porque son mujeres, lo que las hace aún más vulnerables es la ocupación desautorizada que desempeñan

De acuerdo a Patsilí (2009) sobre la base de los conceptos de femicidio y femicidio, es posible constatar que en los planos teórico y político existen

diferencias de contenido entre estas dos nociones y que muchas veces también difieren de ellas los hechos que, en definitiva, son relevados en las investigaciones empíricas o de campo precisamente por ser diversos los objetivos y fines de estas aproximaciones. Este es el contexto en que surgen las elaboraciones jurídicas que se han sumado en los últimos años en la región – como consecuencia de leyes penales o proyectos de tipificación penal– que han contribuido también a hacer más complejo el escenario teórico relativo a este fenómeno. (p.33).

2.2.1.4. El feminismo jurídico

Toledo,(2009) observa que, históricamente, las diversas formas de violencia contra las mujeres y las leyes penales han tenido una relación difícil. Los países latinoamericanos adoptaron las normas civiles y penales de los Estados conquistadores y, con ellas, todo un sistema jurídico destinado a asegurar la subordinación de las mujeres. (Toledo, 2009:57), desde donde se da una evolución histórica de leyes patriarcales a leyes específicas sobre violencia contra las mujeres, En efecto, al analizar normas hoy ya derogadas, vemos cómo el Derecho tradicionalmente ha sido la forma a través de la cual se ha organizado el poder de los hombres sobre las mujeres.

Esto ha ocurrido no sólo a través del Derecho Civil, que –en materia de familia– fundaba el matrimonio en la autoridad marital –incluyendo el derecho de corrección sobre la mujer y los hijos– y desconocía la plena capacidad a las mujeres casadas; sino también a través de las normas penales. Baste pensar como ejemplos en el uxoricidio, por el cual se atenuaba sustancialmente la responsabilidad penal del marido que mataba a la mujer adúltera, el delito de adulterio como ilícito que sólo podía ser cometido por la mujer (no por el marido), la extinción de la responsabilidad penal del violador por el posterior matrimonio con la ofendida, la exigencia de honestidad o buena fama en las víctimas de ciertos delitos sexuales, etc. (Patsili, 2009:57), Como se puede apreciar, todas figuras penales en que la mujer puede ser sujeto activo o pasivo del delito, pero en las que, en cualquier caso, se refuerzan los roles y estereotipos de género que pesan sobre ella.

En la mayor parte del mundo y América Latina, este tipo de normas han ido desapareciendo con el tiempo a medida que ganaban terreno los derechos de las mujeres y a mitad del siglo pasado se produce una serie de reformas legales en materia penal tendientes a lograr la efectiva neutralidad de un Derecho penal que, hasta entonces, era el mero reflejo de un sistema en que los derechos de las mujeres estaban subordinados a los que tenían los hombres sobre ellas.

2.2.1.4.1. Las corrientes del feminismo jurídico

Para Barnett (1998) El feminismo jurídico, al igual que el feminismo, está integrado por distintas corrientes que, aunque comparten ciertos elementos comunes, también ponen de manifiesto diferencias que enriquecen al propio movimiento. De hecho, “debe reconocerse que la Teoría del Derecho feminista no ha sido una teoría coherente, monolítica y unificada”. (p.13).

Barnett (1998) la Teoría del Derecho feminista en tres fases:

a) La primera coincide con el feminismo liberal. Se caracteriza principalmente por la lucha por la consecución de la igualdad. No hay un cuestionamiento del sistema, se pretende simplemente eliminar aquellos elementos del mismo que hacen que se generen desigualdades. Como dice Barnett, (1998) “las objeciones de las feministas en esta fase no son a la ley per se sino a la mala ley: aquella que genera exclusión o va en detrimento de las mujeres” (p.5)..

Comulgan con la ideología liberal pero creen que el sistema tiene algunas deficiencias que pueden ser corregidas. Afirman que en algunos ámbitos todavía no se ha logrado la plena igualdad de hombres y mujeres, y que éstas siguen estando relegadas al ámbito privado. Es necesario eliminar aquellas prácticas y leyes que niegan a las mujeres el acceso a la esfera pública, pues las diferencias biológicas no impiden que puedan llegar a ser iguales.(126).

Facchi (2005) Comenta: Se aspira a eliminar las diferencias entre los sexos, lo que se traduce en lo jurídico y en lo práctico a una equiparación de las mujeres a los hombres y al uso de fórmulas neutrales, descartando aquellos valores que se atribuían a las mujeres por ser consideradores secundarios o inferiores.(p.28).

A través de estas formulaciones las feministas logran alcanzar nada más y nada menos que la igualdad formal, negada durante siglos a las mujeres. Pero pronto

surgen voces disidentes que advierten de las consecuencias negativas para las mujeres.

El problema, a juicio de Barnett,(1998) es que el Derecho se plantea en términos neutrales y genera la ilusión liberal de que el Derecho es ciego al género. Esto no es una reflexión precisa de la realidad del Derecho y se demuestra a través del análisis del modo en que la ley se aplica en circunstancias que tienen consecuencias adversas para las mujeres pero no para los hombres, pues es el hombre y no la mujer el referente, el sujeto del Derecho. (p.127).

En definitiva, uno de los graves problemas que aquejan al Derecho todavía hoy es que tomamos como referente al hombre, y no sólo al hombre en general, sino a uno en particular: al hombre blanco, heterosexual, de clase media...

b) La segunda etapa incluye, entre otras, a las feministas radicales y a las culturales. Aquí lo que se pone en evidencia es que a pesar de los cambios jurídicos logrados gracias a las demandas de la primera ola, las mujeres continúan siendo discriminadas. A su juicio el problema estriba en que el Derecho, en sí mismo, es masculino y perjudica a las mujeres.

Por primera vez se pone de manifiesto que “asumiendo un lenguaje jurídico neutral, la ley esconde hasta qué punto el Derecho está permeado por constructos y estándares masculinos” (Barnett 2008. p.7).

Esta segunda corriente es especialmente rica en teorías, entre otras cuestiones porque abarca a su vez varias vertientes feministas, de las que me referiré a dos, la radical y la cultural.

La radical, cuya máxima representante es Mackinnon, parte de la premisa de que el Derecho es intrínsecamente patriarcal. Considera que valores como la objetividad, la neutralidad o la universalidad operan bajo lógicas masculinas. El acento lo pone no tanto en la diferencia, como harán las culturales, sino sobre todo en la opresión.

Facchi, (2005) Hay quien ve en esta autora un posicionamiento poco alentador sobre el Derecho en el sentido de que no cabría de construirlo y reconstruirlo para que dejara de ser patriarcal. Sin embargo, no existe unanimidad sobre este

extremo y, de hecho, Facchi considera que las luchas que ha mantenido desde el activismo, como en el caso de la pornografía o del hostigamiento sexual, son una prueba de que sí ve factible la transformación del Derecho.(p.37).

En todo caso, más allá de esta polémica en torno a la autora, lo destacable es que las radicales manifiestan su inconformidad con el Derecho por mantener, bajo el velo de la neutralidad, unas estructuras que son masculinas y que se mueven entre la dominación y la subordinación.

Para Suárez (2002) relevante a los efectos de este trabajo son también las aportaciones de las feministas culturales porque, “se enfrentará (...) a la concepción positivista del Derecho vinculada a la concepción liberal, a la proclamación de los derechos individuales en cuanto presupuesto fundamental, a sus principios inspiradores – generalidad, neutralidad e imparcialidad – y a su propio método”. (p.171).

“Lo que se objeta es el presupuesto liberal fundamental que afirma que los individuos se encuentran esencialmente separados y que sustenta pleno de vigor el concepto de autonomía a cuyo servicio se encuentra el Derecho liberal”.(Suárez,2002).

De este modo, la objeción parte de dos elementos de análisis. (Suárez 2002) (p.186).

El rechazo al positivismo del sistema jurídico y de la norma: Se critica la pretendida imparcialidad y neutralidad que afianza la lógica patriarcal, pues tras el velo de las mismas se esconde una discriminación evidente, no ya sólo respecto de las mujeres, sino en general de cualquier grupo o persona que no se identifique con el modelo masculino hegemónico.

Barnett (1997) El sistema actual “sólo redundaría en el favorecimiento de los cánones patriarcales institucionalizados con exclusión de la emoción, el cuidado, la responsabilidad, el contexto de las relaciones cercanas y significativas y la consideración de las circunstancias particulares”. (p.127).

También van a cuestionar el método legal, al que acusan de no poder cumplir con la neutralidad que supuestamente les caracteriza. Suárez (2002) se acercan

al realismo jurídico y a los Critical Legal Studies, pues hacen referencia a la falta de neutralidad de los operadores jurídicos.

Es necesario tener en cuenta las circunstancias personales y materiales, de modo que no puede tomarse al sujeto como desprovisto de las contingencias que son características de los seres humanos, y debe hacerse a través de “un método relacional vinculado a la concepción contextual y del cuidado característicamente femenina” (Scales 1993).

En todo caso no se trata de caer sin más en el esencialismo que caracteriza a algunas feministas culturales, ni tampoco (o no siempre) de eliminar los conceptos propiamente liberales, sino de dotarles de un nuevo sentido.

Existe una corriente, que Beltrán, (citado por Laporta 2012) califica como feminismo jurídico antiesencialista que se enmarca dentro del movimiento de los Critical Legal Studies y que se conoce como “femcrits”. Ésta representa distintas visiones feministas pero puede decirse que, en general, considera que *“el derecho es política sexual, lo cual supone que no hace falta imaginarse cómo funciona la estructura social de dominación y de opresión, porque es suficiente con tomar en cuenta las perspectivas subjetivas de las propias mujeres”*. (p.105).

c) La tercera corriente, ligada al postmodernismo, coincide con la anterior en que el Derecho tiene género masculino, pero cuestiona que no sea posible modificarlo para subvertir el orden establecido. Reniega de las grandes teorías y apunta que el Derecho, al igual que la sociedad, es mucho más rico en matices, (Barnett1997)

Esta línea de pensamiento es fundamental como crítica al sistema, especialmente a los valores ilustrados que han permanecido hasta nuestros días, pero también puede resultar muy peligrosa para el feminismo en la medida en que también pone en cuestión la categoría *gender*.

Como dice Barnett,(1997) la reacción del feminismo al postmodernismo y al post estructuralismo es tanto positiva como negativa porque por un lado ofrece nuevas técnicas para analizar los conceptos, el Derecho y los sistemas legales pero de otro es visto como un peligro a la posibilidad de entender la teoría feminista como coherente.(p.8).

El gran problema es que desde el postmodernismo se quiere acabar con las meta narrativas, y con ellas con el propio concepto de gender que atraviesa toda la teoría feminista y que es determinante para justificar sus propias demandas.

Un posicionamiento como el que plantea el postmodernismo iría, en mi opinión, en detrimento de las mujeres y haría perder fuerza al propio movimiento feminista pues el género es una categoría central, y de momento insustituible, que es necesaria para cuestionar el sistema.

No obstante, sí es cierto que, como apunta Barnett,(1998) el postmodernismo ha aportado otras reflexiones que el discurso feminista ha incorporado. Una es la crítica según la cual las mujeres no sólo se ven afectadas por el género, sino también por otras variables como la raza, la clase o la edad, en definitiva, nos ayuda a evitar el error de pensar que todas las mujeres son iguales. La otra es que la técnica deconstructiva ha permitido poner en evidencia las desigualdades del sistema.(p.197).

2.2.2. La igualdad ante la Ley: Principio y Derecho fundamental Constitucional

La Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la igualdad, cuyo artículo 2 inciso 2, determina: “Toda persona tiene derecho: (...) A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”, lo que significa que estamos frente a un derecho fundamental y no puede interpretarse de forma literal contraria, pues no consiste en la facultad de las personas de exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.

Al abordar el tema de la igualdad desde una perspectiva constitucional, cabe conceptualizarla en una doble dimensión, por un lado como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, siendo un valor fundamental y una regla básica que éste debe garantizar y preservar. Y de otro lado, como un derecho constitucional subjetivo, individualmente exigible, que confiere a toda persona el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación. (Eguiguren, 1997).

Siendo el Tribunal Constitucional, supremo interprete de la Constitución, el cual ha venido otorgando contenido a sus principios a través de su *jurisprudencia constitucional*, al cual podemos definir como una herramienta fundamental para la construcción y defensa permanente del Estado Social y Democrático de Derecho, pues permite que el modelo mismo de organización política no sólo se consolide sino que se desarrolle un diálogo fructífero y constante entre el texto y la realidad constitucional, es decir *“La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional es, en buena cuenta, Constitución viviente de la sociedad plural ”* (STC,048-2004) lo que se puede apreciar cuando el Tribunal ha recogido y concretizado jurisprudencialmente en un postulado normativo, el principio –derecho de la dignidad humana,“...de forma similar a la igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional...(Exp. N° 02273-2005-PHC/TC, fojas 9,)”, es decir para el Tribunal Constitucional, como órgano máximo de interpretación de la Constitución ha reconocido y afirmado que *“la igualdad consagrada constitucionalmente detenta la doble condición de principio y derecho fundamental”*;

A).La igualdad como Principio

Es uno de los pilares del orden constitucional, lo que permite la convivencia armónica en sociedad, es también principio rector del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos, el cual vincula de modo general y se proyecta sobre el ordenamiento jurídico, pero la aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues no todo trato desigual constituye discriminación, sino aquellas desigualdades que carezcan de justificación objetiva y razonable, por tanto un trato desigual no vulnera el principio de igualdad si se establece sobre bases objetivas y razonables;

En ese sentido, el Tribunal Constitucional reconoce las dimensiones formales y materiales de la igualdad, descrita con claridad en el tercer fundamento jurídico de la Sentencia de Tribunal Constitucional, signada con el Expediente Nro. 0261-2003- AA/TC (TC Perú, 2003), cuando señala lo siguiente. “(...) El principio de igualdad se concretiza en el plano formal mediante el deber estatal de abstenerse de la producción legal de diferencias arbitrarias o caprichosas; y en el plano material apareja la responsabilidad del cuerpo político de proveer las

óptimas condiciones para que se configure una simetría de oportunidades para todos los seres humanos (Espinoza, Saldaña-Barrera . 2010 p. 90); y,

B) La igualdad como Derecho Fundamental

Es el reconocimiento de un derecho subjetivo es decir la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, pues el “derecho a la igualdad ante la ley”, prevista en el art. 2 inc. 2, de la Constitución quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma; y que dicha igualdad contiene un mandato derivativo de aquel, que es la *prohibición de discriminación* en cuanto constituye el *derecho a no ser discriminado* por razones proscritas por la propia constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (motivo de cualquier otra índole), que jurídicamente resulten relevantes, derecho que se traduce en una exigencia individualizable que el individuo puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele.

Aunado a ello podemos destacar lo establecido por el Tribunal Constitucional, para quien el derecho a la igualdad, “... a su vez tiene dos dimensiones: *formal y material*. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que esté no realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad”.

2.2.2.1. Vulneración del principio de igualdad

Se han formulado serias críticas contra los tipos penales género específicos, en España es la de la vulneración del principio de igualdad, de acuerdo a Polaino (2005), fundamentalmente por cuatro motivos:

Por negar a los hombres la posibilidad de hacer uso de la protección penal que se otorga sólo a las mujeres en tanto en cuanto sólo éstas pueden ser sujeto pasivo del delito.

-Por impedir que los hombres puedan usar los juzgados de violencia sobre la mujer.

-Por imponer a los hombres penas más elevadas por la realización de comportamientos que supuestamente son los mismos. Como dice Polaino (2005), “la conducta es la misma y el Derecho penal debe aplicar la igualdad”.

- Porque se estaría dando más importancia a vulneraciones a los derechos fundamentales de las mujeres que a los de los hombres. Se dice que no hay una razón de peso para fundamentar una mayor gravedad de un bien jurídico que es el mismo, por ejemplo la salud.

Estas críticas responden, como dice Lorenzo (2008) a que el Derecho penal parte de falsos universalismos patriarcales, donde prima la igualdad formal y no se tiene en cuenta el contexto, por lo que parece lógico que se planteen críticas porque se trata de reformas que son extrañas al sistema penal.

Tradicionalmente en el Derecho penal, y en general en el Derecho sancionador no es posible comparar, y por lo tanto, no se reconoce ni el Derecho antidiscriminatorio ni la violencia contra la mujer como una discriminación, lo que permite entender que inicialmente tampoco la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer incluyese la violencia contra las mujeres como forma de discriminación.

Para Barrère (2004) este reconocimiento ha supuesto un cambio trascendental, novedoso incluso, porque para fundamentarlo no se puede acudir ni a la igualdad entendida sin más como el ejercicio de derechos individuales ni a la discriminación partiendo de la igualdad de trato, porque hay que tener en cuenta

una serie de estructuras de dominación que no pueden desconocerse y que ponen de manifiesto que no es sólo un problema de derechos sino también de poder.

En sentido similar, Añón y Mestre (2009) se refieren a una igualdad que identifican con la no subordinación y el empoderamiento de las mujeres y que va más allá de la no discriminación porque es necesario transformar las relaciones de poder. Es la igualdad como diferencia, que es la base de las normas sexo específicas.(p.49).

Siendo este un posible debate sobre la vulneración o no del principio de igualdad, el más habitual, a propósito de los tipos penales, ha consistido en dilucidar si el Derecho antidiscriminatorio tiene o no cabida en el Derecho penal.

En su vertiente negativa, esto es, en la contención de aquellos actos que perjudican a un determinado colectivo, el mandato de no discriminación es frecuente en el Código penal español. El artículo 22 Cp, ya citado, es un buen ejemplo de ello. Nadie discute este tipo de artículos. El nudo del problema se encuentra en la manifestación positiva, tendente a eliminar aquellos obstáculos que impiden alcanzar la igualdad material y que no son meras excepciones sino auténticas concreciones del principio de no discriminación.(Laurenzo, Maqueda y Rubio, 2006.p.206,208).

En realidad, puede decirse que lo que se trata de averiguar es si reconocemos o no la igualdad material en el Derecho penal o meramente la igualdad formal. ¿Debe aplicarse la igualdad real, que además se garantiza nada más y nada menos que en la Constitución, o el Derecho penal es una rama que debe quedar fuera de esa previsión constitucional? Lo cierto es que hay autoras que manifiestan su sorpresa al advertir que todavía sigue primando una visión exclusivamente formal de la igualdad.(Bodelón 2008) .

Si consideramos que también debe garantizarse la igualdad material, el hecho de que se excluya al hombre como sujeto pasivo y se le impongan penas más severas, sólo puede justificarse si reconocemos que existe la violencia de género.

Si se parte de la negación de la existencia de la violencia de género, si se considera que no existe como tal⁴⁰³, que no hay una violencia estructural, fruto de las relaciones de dominio y subordinación, se puede argumentar que se está tratando de forma desigual al varón. En caso contrario, si se admite la diferencia, entonces no habría vulneración porque se trataría de violencias distintas.(Laurenzo, et al, 2008).

Y por supuesto si una mujer agrede a un hombre, fruto de una violencia que podemos denominar común, siempre podrá acudir a los tipos penales ya existentes, por lo que en ningún caso quedaría desprotegido.

Quienes están a favor de su reconocimiento se dividen entre quienes apelan al Derecho antidiscriminatorio y quienes mantienen que no es necesario acudir a éste porque el propio Derecho penal es suficiente para consagrar la igualdad material.

Los primeros consideran que en última instancia, lo que se pretende alcanzar es la igualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género es un tipo de discriminación que padecen exclusivamente las mujeres. A partir de ahí el problema radica en la definición que demos de acción positiva.(Barrere,2004).

Si bien es cierto que inicialmente las acciones positivas estaban pensadas para lograr que las minorías pudiesen acceder a determinados lugares en escenarios de escasez y competitividad, en la actualidad hay quien ha formulado significados más amplios. Así Barrere,(2004) lo define como “política (y medidas) orientada a la igualdad entre los grupos basada en el status de los mismos, antes que en el trato”.

En relación con los tipos penales incorporados a la LO 1/2004 no existe unanimidad. Hay quien parte una visión estricta, más tradicional, y así, Acale dice que “el Derecho penal no puede ofrecer bienes distribuibles porque carece de bienes que distribuir”⁴⁰⁸. Para ella “el Derecho penal parte del imponderable principio de igualdad y, en él no hay lugar alguna para la desigualdad: ni positiva ni negativa” (Barrere, 2004). Parece por tanto rechazar cualquier atisbo de igualdad material.

Particular es el caso de Lorenzo, (2008) quien por una parte señala que no le faltaría razón a quienes apoyan las acciones positivas si por tales entendemos “toda política o medida de carácter diferenciado tendente a favorecer a los miembros de un grupo socialmente subordinado” (...) Pero a continuación rechaza ese tipo de razonamiento porque se basa en una definición estricta del concepto y dice que, a su juicio, es un campo pensado para la distribución de recursos escasos, lo que es extraño al Derecho penal.(p.8).

Para ella no se trata de dar beneficios a las mujeres (o a un grupo que esté siendo discriminado), lo cual por otra parte es visto por muchos como una característica propia de las acciones positivas que impide su aceptación por el Derecho penal sino de garantizar que puedan disfrutar de los bienes protegidos, para lo que necesitan una protección reforzada en la medida en que corren más peligro de que se vean vulnerados. Algo, que por otra parte ya se da en el Derecho penal respecto de otros colectivos. Frente a esta argumentación, otros juristas han planteado que es una visión muy restrictiva de las acciones positivas y que su uso en el Derecho penal podría ampliar el contenido de las mismas, puesto que tanto si se trata de una justicia distributiva como si es conmutativa, en ambos casos la base sobre la que descansa es el cese de una desigualdad.

La otra posibilidad, utilizada al mismo tiempo por algunos de quienes se adscriben a la primera opción, es apoyar los tipos penales género específicos a través de principios propios del Derecho penal sin que sea necesario acudir a la categoría de acciones positivas. Existen opiniones divergentes en este punto. Por ejemplo, algunos juristas lo focalizan en la no aplicación de manera automática del tipo, es decir que se demuestre que hay violencia de género,(otros justifican la tutela penal reforzada en el mayor riesgo de las mujeres de padecer la violencia.(Domínguez, 2009).

Si volvemos al supuesto del feminicidio/femicidio, observamos como los motivos que se alegan para defender la supuesta vulneración del principio de igualdad son los mismos: el sujeto pasivo sólo puede serlo una mujer y las penas son más elevadas para los hombres, aunque en este caso no en todos los ordenamientos se exige que el sujeto activo sea un hombre como ocurre en México.

2.2.3. Garantías constitucionales del proceso penal

2.2.3.1. Garantías generales

2.2.3.1.1. Principio de presunción de inocencia

Supone que nadie puede ser considerado responsable por la comisión de un delito mientras no se establezca plenamente su culpabilidad. Villavicencio (2013).

Artículo II° del Nuevo Código Procesal Peruano. (2004). Presunción de inocencia.

1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado.

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido.

Talavera (2009) comenta: en concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el artículo 2º, inciso 24, de la Constitución señala:

“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Así, el constituyente ha reconocido la como un derecho fundamental. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia como un derecho fundamental, se halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana, como en el principio prohomine [STC10107-2005-PHC/TC].

El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva” [STC 0618-2005-PHC/TC].

Dentro de los principios garantistas se considera el principio de inocencia el cual significa que para una persona sea considerada culpable tiene que ser producto de una resolución judicial o sentencia condenatoria.

2.2.3.1.2. Principio del derecho de defensa

La legítima defensa. Es la conducta asumida por parte del agraviado con el propósito de proteger bienes jurídicos amenazados por el agresor. A decir de Wetsell (1956) “el fundamento de la legítima defensa reside en que el derecho no está en la situación de soportar o ceder ante lo ilícito.” (p.461).

Está concebido de manera esencial para el debido proceso que permite al imputado hacer frente al sistema penal en una formal contradicción con igualdad de armas.(Oré s/f).

El Artículo IX°. Derecho de Defensa, del Código Penal sostiene:

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.
2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.

El artículo IX del título preliminar del CPP establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”.

Por su parte Cubas (2015) expresa que para promover la efectiva vigencia de este derecho, se garantiza la asistencia de un traductor o interprete cuando no se hable el idioma del tribunal, la información del hecho, la libertad que tiene el imputado para decidir si declara o si guarda silencio: la posibilidad real y concreta que puede comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa y ofrecer medios probatorios (p.42).

Este principio consiste en, todo acusado tiene derecho a contar con el apoyo legal de un abogado, sea de parte o asignado por el Estado.

2.2.3.1.3. Principio del debido proceso

Según Rodríguez (s/f) El derecho a un debido proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de defensa procesal”, es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro.

El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”.

El Poder Judicial (s/f) considera que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, **principio de "bilateralidad de la audiencia"** del **"debido proceso legal"** o **"principio de contradicción"**.

2.2.3.1.4. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Según la Carta Magna, Artículo 139, inciso 3° La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, acota:

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

Se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales: a) un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de representante, ante los órganos judiciales; b) de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley; c) de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, d) de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida.

Es un principio que protege el desarrollo del proceso en la jurisdicción la cual le compete y aspira dentro de los derechos constitucionales que la persona imputada de un delito sea merecedora de una sentencia fundada en el derecho.

2.2.3.1.5. Principio de legalidad

Según el Poder Judicial (s/f) es un principio definitorio del proceso penal. Se refiere a que los delitos y las penas deben estar debidamente establecidos por la ley. Solo la ley determina las conductas delictivas y sus sanciones. “*Nullum crimen, nulla poene sine lege*”, no existe delito ni pena sin ley que lo haya establecido previamente. De ello deriva, que en nuestras sociedades, la ley debe ser escrita (*Lex scripta*) no determinada por los usos ni la costumbre, anterior a los hechos (*Lex praevia*), estricta (*lex stricta*) no aplicable por analogía en modo alguno y cierta (*lex certa*) de aplicación taxativa y plenamente determinada.

El principio de legalidad, en el derecho penal es a la par que el debido proceso un principio matriz (El principio de los principios) y a la vez una garantía y un derecho fundamental de cada uno. En tal sentido, se encuentra expresamente establecido por nuestra Constitución Política del Estado en su Artículo 2 numeral

24 literal D, que dice: *“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.”*

En el Nuevo Código Procesal, el Principio de Legalidad, se encuentra enunciado entre otros, en el Artículo I numeral 2 del Título Preliminar del CPP, que establece: *“Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este código.”* Ello nos recuerda que el proceso penal se encuentra plenamente determinado, en forma previa, estricta y cierta por la ley.

2.2.4. Teorías criminológicas

2.2.4.1. Teoría del dominio del hecho

Según Daza (s/f) Franz von Liszt sustentó el concepto unitario de autor, concepto este en el que no se hace una distinción entre autor y partícipe. Lo anterior, se comprende porque, como se sabe,- Franz von Liszt se basó en la teoría de la “conditio sine qua non”; y debido a que esta doctrina no soluciona el problema de la autoría mediata ni de la coautoría, se propuso el concepto extensivo de autor, el cual no encontró eco ni solución a la problemática planteada; por ello, *se llegó al **concepto restrictivo de autor, el cual se funda en el principio de legalidad***, sin que ofrezca una alternativa al problema de la autoría mediata. Welzel propuso la *teoría del dominio del hecho*, que posteriormente es aceptada y desarrollada por Claus Roxin.

El concepto de autor y el de partícipe han variado según sea el criterio sobre el cual se erija la teoría general del delito; de tal manera que, concerniente a ello, se han presentado teorías puramente objetivas y subjetivas. Y hoy en día las denominadas teorías funcionalistas atienden a la manera concreta respecto de cómo se concibe el Derecho penal, y más estrictamente, en atención a saber cuáles son los principios sobre los que descansa cada elemento de la teoría general del delito.

2.2.4.1.1. Evolución histórica del concepto de autor

El concepto de autor, en la doctrina penal de corte causalista, se configuró del siguiente modo: es autor quien es causador de un delito. Posteriormente, mediante la postura del finalismo, la calidad de autor se caracterizó en virtud de la actuación final del sujeto perturbador del orden jurídico; más recientemente, atendiendo a la denominada posición teleológico-racional del Derecho penal, (Roxin,,1970) la autoría y la participación- han sido comprendidas respondiendo a la pregunta de saber quién tuvo el dominio del hecho respecto del ilícito cometido; de tal manera que los autores siempre tienen el dominio del hecho, mientras que los partícipes por su arte nunca alcanzan tal dominio, ya que su aporte es un tanto accesorio al comportamiento verdaderamente delictivo.

Una corriente todavía más revolucionaria que la del dominio del hecho, ha querido renovar los conceptos de autoría y de participación, por supuesto que nos estamos refiriendo al funcionalismo sistémico-normativo de Günther Jakobs. Dentro de ésta perspectiva, se han analizado diversos supuestos en los que la participación delictiva puede revestir una configuración culposa, e incluso se ha desarrollado una teoría respecto de la prohibición de sobrevaloración del aporte en los casos de participación; y no obstante lo anterior, también se han presentado ciertas tendencias que pretenden hacer de la -así denominada- prohibición de regreso, una teoría general de la autoría y de la participación.(Ferrante 1998. p. 91).

Tal como se tiene oportunidad de verificar, la autoría y la participación representan en nuestro campo, el basamento teórico sobre el cual es susceptible hacer descansar todo principio de imputación jurídico-penal. Así, por ejemplo, Günther Jakobs abre nuevas posibilidades de solución en la imputación penal cuando, a partir del concepto "competencia del hecho", subdivide los niveles de autoría y participación en competencia por la infracción de un deber, y competencia por el dominio de una acción. Acorde con lo anterior, se puede abreviar la expresión siguiente: es autor quien tiene una competencia decisiva sobre determinado ámbito de organización

2.2.4.1.2. Concepto unitario de autor

Según Gómez, Arroyo, y Ferré,(1996) Ante la concurrencia -y no precisamente concurso- de personas ante un mismo hecho delictivo, el concepto unitario de autor no sabe distinguir entre autoría y participación.

Aquella falta de límite entre la autoría y la participación que nos llega a propósito del concepto unitario de autor, tiene lugar en virtud de considerar el aporte de cada una de las personas que concurren ante un mismo hecho como causas equivalentes sin las cuales el resultado no hubiera acontecido. Y si todos los aportes de las personas que concurren para la comisión del hecho, son aportes o causas equivalentes, entonces es esta equivalencia de contribuciones la que no permite diferenciar entre quién es autor y quién es partícipe, dado que se califica a todos los intervinientes como si tuvieran aportaciones causalmente equivalentes. Una de las principales causas por las cuales no tuvo éxito esta teoría, es la superación del dogma causal. (Jakobs,1996).

2.2.4.1.3. Concepto extensivo de autor

El concepto extensivo de autor reviste dos vertientes: de un lado, Schmidt y Lony, autores que defienden el concepto extensivo de autor con una visión en que la causalidad de la acción de los intervinientes es poco trascendente, y enfoca su trabajo principalmente a explicar la autoría mediata. En otro sector están los destacados penalistas: Mezger y Spendel, quienes dotan al concepto extensivo de autor, de un contenido puramente causal.

Frecuentemente se reconoce que el concepto extensivo de autor tiene lugar a partir de la falta de coherencia que reviste en la autoría mediata partiendo del punto de vista del concepto restrictivo de autor. Schmidt formula una monografía sobre "La autoría mediata"; posteriormente su discípulo Lony, realizó una monografía sobre el concepto extensivo y restrictivo de autor.

Ahora bien, debe decirse que el concepto extensivo de autor tiene el fundamento sobre la causalidad provocada o favorecida respecto de quien dañó algún bien jurídico tutelado.

Es ampliamente conocido que Roxin propicia la política criminal al interior de la dogmática penal; adelantando los fines de prevención especial y general frente a cualquier categoría del sistema penal.

Concretamente, el pensamiento de Claus Roxin, en cuanto a la autoría y participación, consiste en diferenciar (en el campo de lo punible) entre autoría y participación, conforme a criterios cualitativos, y no -como pretende otro sector de la doctrina representado mayoritariamente por Jakobs, - en atención a puntos de vista cuantitativos.

En el entendido de que es autor directo sólo quien tiene el dominio de la acción típica, cabe argumentar que la autoría directa es siempre unipersonal y material, dado que el sujeto que tiene el dominio del hecho en virtud del dominio de la acción, será evaluado como autor principal que (de propia mano), materializó el hecho antijurídico, con los medios comisivos que al efecto fueran suficientes.

2.2.5. Teorías Humanistas

2.2.5.1. Teoría de las necesidades

Maslow, (1960) Psicólogo norteamericano propulsor de la psicología Humanista, propuso una teoría de las necesidades humanas las cuales estaban organizadas y dispuestas por niveles, en una jerarquía de importancia y de influencia. Considero que la motivación se deriva de la satisfacción sucesiva de las necesidades de más alto nivel.

La teoría de las Necesidades se concentra en lo que requieren las personas para llevar vidas gratificantes, las personas están motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades clasificadas con cierto orden jerárquico.

A diferencia de las teorías cognoscitivas, donde el conocimiento es el que regula, Maslow postula que la mayoría de los estados motivacionales provienen de los objetivos de inconscientes. Maslow desarrolla su teoría de la *jerarquía de las necesidades* alrededor de cinco conjuntos de objetivos, para satisfacer lo que le llama necesidades básicas a saber: *necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor o sociales, de estima, y necesidades de autorealización.*

a) Las necesidades fisiológicas.

Constituyen el nivel más bajo de toda las necesidades humanas, pero son de vital importancia. En este nivel están las necesidades de alimentación (hambre

y sed), de sueño y reposo (cansancio), de abrigo, (frío o calor), del deseo sexual, etc. las necesidades fisiológicas están relacionadas con la supervivencia del individuo y con la preservación de la especie. Son necesidades instintivas y nacen con el individuo. Son las más prepotentes según Maslow, ya que si a una persona le falta todo en la vida, o sea comida, ropa, seguridad, amor prestigio, etc., lo más seguro es que sus necesidades de comida y ropa se conviertan en las más inmediatas, fuertes por lo tanto motivantes de conducta. Si las necesidades fisiológicas son las que dominan al individuo, las otras necesidades serán inoperantes, mientras las primeras no se satisfagan.

Una vez que las necesidades fisiológicas han alcanzado un nivel de satisfacción constante y adecuado, **las necesidades de seguridad** se convierten en las más prepotentes.

b). Las necesidades de seguridad.

Constituyen el segundo nivel de las necesidades humanas. Ellas indican requerimientos de estabilidad, de protección contra la amenaza o la privación, de escape al peligro. Cuando el individuo es dominado por las necesidades de seguridad, su organismo actúa como un mecanismo de búsqueda de protección, funcionando tales necesidades como elementos organizadores, casi exclusivos del comportamiento. Este nivel de necesidades tiene gran importancia en el comportamiento humano, puesto que el empleado está siempre en relación de dependencia con la empresa, en donde acciones administrativas arbitrarias o decisiones incoherentes pueden provocar incertidumbre o inseguridad en el empleado respecto a su permanencia en el cargo. Si estas acciones o decisiones reflejan discriminación o favoritismo o alguna política administrativa imprevisible, se puede volver poderosos activadores de inseguridad en todos los niveles jerárquicos de la empresa. En la sociedad actual, el hombre trata de obtener seguridad contra accidentes, robos, crímenes, tiranía, enfermedades, catástrofes naturales, desorganización social, etc. en países desarrollados el nivel de seguridad es más alto que en los países atrasados dejando de ser un motivante principal para la mayoría de las personas normales.

Si tanto las necesidades fisiológicas como las de seguridad alcanzan un nivel adecuado de satisfacción, el tercer conjunto de necesidades o sea las *necesidades sociales*, entran en operación.

c). Necesidades sociales.

A este conjunto de necesidades, otros autores les han llamado de afiliación de membrecía, ya que no tan solo se refieren a las necesidades de amor u afecto, sino también a las necesidades de pertenencia, de amistad y de sociabilidad. Surgen en el comportamiento, cuando las necesidades primarias (Fisiológicas y de seguridad) se encuentran satisfechas.

Entre ellas están las necesidades de asociación, de participación, de aceptación por parte de los compañeros, de intercambios amistosos, de afecto y de amor.

Cuando estas no son suficientemente satisfechas, el individuo se vuelve antagónico y hostil con las personas que lo rodean. Hay que hacer notar que es tipo de necesidades dan lugar, en la mayoría de los casos, a una doble corriente de interacción, se puede tanto recibir como dar afecto y amistad.

En la sociedad moderna este tipo de necesidades es muy importante, y se dice que muchos de los desajustes familiares se deben al bajo nivel de satisfacción de las mismas, ya que la frustración de las necesidades de amor y de afecto, conducen a la falta de adaptación social y a la soledad. Las necesidades de dar y recibir afecto son importantes fuerzas motivadoras del comportamiento humano.

En vista de que la sociedad se ha vuelto más compleja y los individuos juegan un mayor número de papeles, el contacto social no puede ser tan íntimo como en las sociedades menos complejas.

Una vez cubiertas las necesidades de amor o sociales, *las necesidades de estima* se convierte en más prepotentes y por lo tanto en motivantes de conducta.

d). Necesidades de estima.

Son las necesidades relacionadas con la manera como el individuo se ve y se evalúa. Comprende la autopercepción, la autoconfianza, la necesidad de aprobación social, de respeto, de estatuas, de prestigio y de consideración. Incluye también el deseo de fuerza y de adecuación, de confianza frente al mundo, independencia y autonomía. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de autoconfianza, de valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede producir sentimientos de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, que, a su vez, conducen a desánimo o a actividades compensatorias. Existen dos tipos de estima, la interna o propia estima y la externa que puede tomar la forma de prestigio, status, y reconocimiento por parte de otras personas.

La necesidad de propia estima lleva a las personas a sentirse valiosas en este mundo y a considerar que vale la pena vivir la vida. Si esta necesidad se satisface, la persona desarrolla confianza y respeto de sí misma o de lo contrario complejos de inferioridad y debilidad, o bien hasta frustración. La estimación ajena, o sea la buena apreciación que los demás sienten por una persona y sus logros, concediéndole un alto grado desprestigio tiende a reforzar su propia imagen y a la obtención de mayor congruencia, entre los diferentes papeles que el individuo juega y su propio yo.

Por último, y una vez satisfechas las necesidades anteriores, *las necesidades de propia actualización* se refieren a las más altas aspiraciones del individuo y a su realización una vez cumplida.

e). Las necesidades de autorrealización.

Son las necesidades humanas más elevadas, y están en la cima de la jerarquía. Son las necesidades del individuo de realizar su propio potencial y de auto desarrollarse continuamente. Esa tendencia generalmente se expresa a través del impulso de la persona a ser más de lo que es y de llegar a ser todo lo que puede ser. Se dice que cada persona trae su "cosa y que podrá sentirse satisfecha al llenar sus aspiraciones; así el músico crea melodías y trata de alcanzar el virtuosismo, el intelectual de contribuir al conocimiento general, etc.

Maslow postula que las personas son activadas por motivos de propia realización, han alcanzado un nivel de satisfacción adecuado de las otras necesidades. Y que por lo tanto, dicha satisfacción da lugar a la creatividad más completa y sana. Sin embargo este autor admite que la creatividad puede florecer, aun en personas insatisfechas o infelices, ya que la capacidad de creación constituye una fuerza innata que impulsa a la persona a determinada actividad. Este tipo de necesidades en de los menos estudiados, haciendo falta un mayor esfuerzo de investigación para descubrir los porqués y como de esta necesidad.

Esas necesidades toman formas y expresiones que varían de persona a persona. Su intensidad o manifestación también es muy variada, debido a las diferencias individuales.

La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, presupone los siguientes aspectos:

Solo cuando un nivel inferior de necesidades está satisfecho o es debidamente atendido, surge en el comportamiento inmediatamente más elevado. En otros términos, cuando se satisface una necesidad de nivel más bajo, deja de ser motivadora del comportamiento, lo cual permite que un nivel más elevado sea atendido.

No todas las personas consiguen llegar a la a cima de la pirámide. Algunas personas - gracias a circunstancias de la vida - llegan a preocuparse por fuertemente por las necesidades de autorrealización; otras se estancan en las necesidades de estima; otras en las necesidades sociales, mientras que muchas otras se quedan preocupadas exclusivamente por las necesidades de seguridad y las fisiológicas, sin que consigan satisfacerlas por completo.

2.2.6. Marco Normativo Internacional

2.2.6.1. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ('Convención de Belém do Pará').

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como objeto esencial la

protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, así como las prerrogativas que se encuentran consagradas en instrumentos internacionales. La violencia contra las mujeres contraviene el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y discriminación. Ante esto, los Estados del Continente Americano sumaron esfuerzos para crear, el 9 de junio de 1994, en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ('Convención de Belém do Pará'). México, comprometido con los principios rectores —la no violencia y la no discriminación— de la Convención, ratificó este instrumento internacional de naturaleza jurídica vinculante el 19 de junio de 1998.

a). Compromiso Político para luchar contra la violencia

Por medio de la Convención de Belém do Pará, los Estados Parte acordaron que la violencia contra las mujeres:

[...] constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

[...] es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

[...] trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.

La Convención de Belém do Pará establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este tratado internacional ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención; formulación de planes nacionales; organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas, y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

b) Violencia contra las mujeres: ¿Cómo se define?

El artículo 1 de la Convención la define como:

[...] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La Convención establece tres tipos de violencia:

1. Violencia física: Golpes, jalones, empujones, pellizcos, lesiones, entre otras muestras. 2. Violencia sexual: Imposición para tener relaciones sexuales o violación, abuso sexual o tocamientos sin consentimiento, entre otros. 3. Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, celos, chantajes, intimidaciones, descalificaciones, entre otros.

Ámbitos de visibilización de la violencia

La Convención establece tres ámbitos:

1. En la vida privada: Cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor no viva con la víctima.
2. En la vida pública: Cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que ésta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
3. Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

4. ¿Qué Derechos reconoce y protege la convención

c) Los derechos que esta Convención consagra se contemplan en los artículos 3 al 6.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Este derecho incluye, entre otros:

El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación.

El derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

Tiene derecho a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

El derecho a que se respete su vida;

El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

El derecho a la libertad y a la seguridad personal;

El derecho a no ser sometida a torturas;

El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y a que se proteja a su familia;

El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley;

El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

El derecho a la libertad de asociación;

El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a

¿Qué incluyen estos derechos?

La violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos

2.2.6.2. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará,(MESECVI)

Creado en 2004 su trabajo se fundamenta en los informes nacionales en donde los Estados Parte dan a conocer los avances realizados para la implementación de la Convención.

2.2.6.3. Comisión Nacional de Derechos humanos en la Eliminación de la violencia contra las mujeres

En septiembre de 2012, la CNDH decidió sumarse a la convocatoria de Ban Ki Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien lanzó la Campaña Global “Únete para Poner Fin a la Violencia contra las

Mujeres”, mediante su similar nacional “Únete por los Derechos Humanos para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en México”, con la finalidad de motivar la sensibilización y concientización de la sociedad mexicana; intensificar los esfuerzos de prevención y erradicación de la violencia que se ejerce en contra de ellas en nuestro país; brindarles orientación, protección y defensa, y para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

2.2.6.4. Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, adscrito a la Cuarta Visitaduría General de la CNDH.

Lleva a cabo la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y del principio de igualdad a nivel nacional; la prevención de la violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos y privados; la protección y defensa a los derechos humanos de las mujeres, así como la observancia de la política nacional en materia de igualdad.

2.2.6.5. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Comienza a desarrollarse con fuerza una nueva área en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, *enfocada en los derechos humanos de las mujeres*. Durante la primera fase, este proceso tiene un fuerte énfasis en la discriminación de las mujeres –como lo refleja la propia CEDAW–, la cual es vista como el eje a partir del cual se articula la situación desmedrada de éstas en la mayor parte de las sociedades. Es interesante observar que este eje –la discriminación contra ellas–, de importancia clave en la evolución de los derechos de las mujeres, en la actualidad y con el paso de los años, ha experimentado un cambio sustancial en la forma en que se interpreta y comprende.

Así, del análisis inicial sobre la discriminación a partir de la equiparación respecto de la forma en que eran entendidos los derechos de los hombres –que son tomados como paradigma– se ha dado paso a una interpretación a partir de la realidad de subordinación y sumisión que viven las mujeres en el mundo, sin que necesariamente exista un correlato directo o inmediato con un derecho de los hombres, es decir, no se trata ya de sólo lograr el reconocimiento de los mismos

derechos que a ellos se les ha reconocido históricamente –derecho al voto, al trabajo, a la participación política, a la misma remuneración, etc.– sino también del reconocimiento de derechos que surgen en la medida en que se consideran las características propias de la realidad de las mujeres, por ejemplo, en relación con cuestiones como la violencia y el aborto.

Si bien esta es una cuestión que puede ser rebatida en el plano meramente teórico –efectivamente todos los derechos de las mujeres pueden ser formulados en términos neutros–, la inclusión del factor género en el análisis y formulación de las normas tiene consecuencias fundamentales en la aplicación práctica de las normas para la vigencia efectiva de sus derechos.

Según Naciones Unidas (2006) la **Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)** fue aprobada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979

Entrada en vigor: 3 de setiembre de 1981, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27.

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

Considerando que los Estados Partes en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los

auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos

sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto,

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
- e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
- f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
- g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 4 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 6

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

PARTE II

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

- a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
- b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
- c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III

Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

- a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
- b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;
- c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;
- d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
- e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
- f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Artículo 13

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

- a) El derecho a prestaciones familiares;
- b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
- c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

- a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
- b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
- c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
- d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

PARTE IV

Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

- a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
- b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
- c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
- d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
- e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
- f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
- g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
- h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

PARTE V

Artículo 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.

Artículo 18

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

- a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate;
- b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

Artículo 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.
2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

Artículo 21

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.

Artículo 22

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

PARTE VI

Artículo 23

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:

- a) La legislación de un Estado Parte; o
- b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 25

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

Artículo 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no

estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

2.2.6.6. Declaración Universal de Derechos Humanos Según Naciones Unidas (2006) fue aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados

Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y;

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en

el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. Naciones Unidas (2006).

2.2.6.7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas

Según las Naciones Unidas (2006) fue aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

ENTRADA EN VIGOR: 23 DE MARZO DE 1976, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 49

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos

Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, Convienen en los artículos siguientes:

PARTE I

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

PARTE II

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud del presente Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de

suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

PARTE III

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.
3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la

pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5. La pena de muerte no se impondrá por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia.

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad;

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 11 Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una

obligación contractual.

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 13

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias

especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho

plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Artículo 16 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales.

Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

- a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
- b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 21 Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá

tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

- a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores;
- c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

PARTE IV

Artículo 28

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.
2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la

utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.

Artículo 29

1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Artículo 30

1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto.

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

Artículo 31

1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.

2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica

equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Artículo 32

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros.
2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.

Artículo 33

1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.
2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

Artículo 34

1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del presente Pacto.

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 35

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

Artículo 36

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto.

Artículo 37

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.
2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.
3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo 38

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñará su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 39

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
 - a) Doce miembros constituirán el quórum;

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 40

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:

a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados;

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copia de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.

Artículo 41

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración

por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto;

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente;

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo; e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto;

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier información pertinente;

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) tendrán

derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras;

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada:

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados. En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 42

1. a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una comisión especial de conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto del presente Pacto.

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados

Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 41.

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados:

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto;

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

c) Si no se alcanza solución en el sentido del inciso b), el informe de la Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones

acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los Estados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el artículo 41.

9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo.

Artículo 43

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 44

Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

Artículo 45 El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus

actividades.

PARTE V

Artículo 46

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47 Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

PARTE VI

Artículo 48

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 49

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de

adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 50 Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 51

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 52

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo

48;

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51.

Artículo 53

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.

2.2.7. Legislación

2.2.7.1. Legislación nacional

2.2.7.1.1. Ubicación del delito de Feminicidio en el Código Penal

El delito de Feminicidio está comprendido en la Ley N° 30068 del Código Penal.

2.2.7.1.2. Regulación

El delito de Feminicidio está regulado en el Libro Segundo. Parte Especial. Delitos, Título I: Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en el Artículo 2. Incorporación del artículo 108-B al Código Penal, que a la letra dice: Incorpórase el artículo 108-B al Código Penal, en los siguientes términos:

Artículo 108-B.- Feminicidio

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos”:

LEY N° 30068 LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 108-A AL CÓDIGO PENAL Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 107, 46-B Y 46-C DEL CÓDIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO

Artículo 1. Modificación del artículo 107 del Código Penal

Modifícase el artículo 107 del Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 107.- Parricidio

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108.”

Artículo 2. Incorporación del artículo 108-B al Código Penal

Incorporase el artículo 108-B al Código Penal, en los siguientes términos:

"Artículo 108-B.- Femicidio

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
 1. Si la víctima era menor de edad;
 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación;
 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente;
 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación;
 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad;

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes.”
8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente.
9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda.

Artículo 3. Modificación de los artículos 46-B y 46-C del Código Penal

Modifícase: El segundo párrafo del artículo 46-B y el primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, los que quedan redactados de la siguiente manera: "Artículo 46-B.- Reincidencia El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión de faltas dolosas.

Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-B, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la comisión de nuevo delito doloso, el juez

aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados, salvo en los delitos señalados en el segundo párrafo del presente artículo.

Artículo 46-C.- Habitualidad Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años.

El plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-B, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en el párrafo anterior, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional.

En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes penales cancelados, salvo en los delitos antes señalados.” Artículo 4. Modificación del artículo 46 del Código de Ejecución Penal

Modifícase el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 46.- Casos especiales de redención En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-B, 121-A, 121-B, 189, 200, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y la educación a razón de un día de pena por seis días de labor efectiva o de estudio, según el caso.

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46-B y el primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos previstos en los delitos señalados en los artículos 107, 108, 108-B, 121-A, 121-B, 152, 153, 186, 189, 200, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o de estudio o en su caso.

2.2.7.1.3. Tipo penal

De acuerdo a Zaffaroni, (2008) el tipo penal es un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptivos, que tiene por función la individualización de conductas humanas penalmente relevantes.(...) El tipo pertenece a la ley, son las fórmulas legales que nos sirven para individualizar las conducta que la ley penal prohíbe.(p.453).

El tipo es lógicamente necesario porque sin el tipo no podríamos averiguar la antijuricidad y la culpabilidad de una conducta que en la mayoría de los casos resultaría sin relevancia penal alguna.

Elementos del tipo penal en el Código Penal peruano (2013)¹¹¹

Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto activo:	Una mujer
Elemento objetivo descriptivo	Dar muerte
Elemento objetivo descriptivo	A una mujer
Elemento objetivo normativo:	Mujer en situación de: - Violencia familiar, - Coacción, hostigamiento o acoso sexual - Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. - Discriminación, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
Elemento subjetivo	Dolo directo o dolo eventual
Objeto material	El cuerpo de una mujer.
Bien jurídico	Vida – Igualdad y no discriminación

Elaboración: Defensoría del Pueblo

2.2.8. Legislación internacional

El delito materia de investigación de este trabajo como se dijo anteriormente presenta diferentes denominaciones en la comunidad jurídica internacional específicamente en la región. A saber:

PAIS	DENOMINACIÓN
CHILE	FEMICIDIO
COSTA RICA	FEMICIDIO
EL SALVADOR	FEMINICIDIO
GUATEMALA	FEMICIDIO
MEXICO	FEMINICIDIO
NICARAGUA	FEMICIDIO
PERÚ	FEMINICIDIO

Fuente: Elaboración propia

Como consecuencia del aumento, en la última década, del número de asesinatos de mujeres por razón de género, los índices de impunidad y las demandas de las organizaciones de mujeres existe en América Latina una tendencia, que se ha reconocido en la 57 Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW), de tipificar en determinadas circunstancias el asesinato de mujeres como femicidio o feminicidio según los países. En América Latina, siete países han aprobado hasta 2012, leyes que tipifican este delito: Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua, y son:

Leyes que tipifican el femicidio / feminicidio según país y fecha de vigencia

Chile	Reforma del Código Penal (artículo 390)	Ley No.20480 del 14 de diciembre de 2010. publicada el 18 de diciembre de 2010, vigente el día de su publicación (principio de vigencia inmediata de la ley)
Costa Rica	Ley de Finalización de la Violencia Contra las Mujeres	Ley No.8589 del 25 de abril de 2007, publicada y vigente a partir del 30 de mayo de 2007
El Salvador	Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Ley No.520 del 25 de noviembre de 2010. vigente a partir del 1 de enero de 2012
Guatemala	Ley contra el femicidio y varias formas de violencia contra la Mujer	Decreto 22 2008 del 2 de mayo de 2008, publicado el 7 de mayo de 2008, vigente 7 días después de su publicación (15 de mayo de 2008)
México	Reforma del Código Penal Federal (artículo 325)	Reforma de fecha 13 de junio de 2012, vigente a partir del 15 de Junio de 2012

Nicaragua	Ley Integral contra la violencia hacia las Mujeres	Ley No.779 del 20 de febrero de 2012, publicada el 22 de febrero de 2012, vigente 120 días después de su publicación (junio de 2012)
Perú	Ley 30819 Art 8- B	<p>Artículo 1. Modificación del artículo 107 del Código Penal Modifíquese el artículo 107 del Código Penal, "Artículo 107.- Parricidio.</p> <p>Artículo 2. Incorporación del artículo 108-B al Código Penal Incorpórase el artículo 108-B al Código Penal, en los siguientes términos:</p> <p>"Artículo 108-B.- Feminicidio</p> <p>Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal" en cualquiera de los siguientes contextos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. <p>La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concorra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana. 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. 9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-l i t r o, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda

Fuente: Elaboración propia

La pena para el delito de femicidio, según país.

Chile	Presidio en su grado mayor a presidio perpetuo calificado
Costa Rica	Prisión de 20 a 35 años, e inhabilitación de 1 a 12 años
El Salvador	Prisión 20 a 35 años Figura agravada: Prisión 30 a 50 años
Guatemala	Prisión de 25 a 50 años
México	Prisión de 40 a 60 años, y de 500 a 1000 días multa Pérdida de derechos con relaciona la víctima, incluidos los de carácter sucesorio
Nicaragua	Prisión de 15 a 20 años cuando el hecho se diera en el ámbito público. Prisión de 20 a 25 años cuando el hecho ocurre en el ámbito privado Si concurren dos o más de las circunstancias mencionadas en el artículo, se debe aplicar la pena máxima. Las penas se aumentan en un tercio si concurre algunas de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de 30 años de prisión
Perú	Artículo 1. Modificación del artículo 107 del Código Penal Modifíquese el artículo 107 del Código Penal, "Artículo 107.- Parricidio. Artículo 2. Incorporación del artículo 108-B al Código Penal Incorpórase el artículo 108-B al Código Penal, en los siguientes términos: "Artículo 108-B.- Femicidio Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal" en cualquiera de los siguientes contextos: 1. Violencia familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concorra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana. 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. <p>Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda</p>
--	---

Fuente: Elaboración propia

La tipificación de este delito obedece a la obligación de los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales pero también al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con que la que se producen, a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como a los altos índices de impunidad.

Con la aprobación de estas leyes los países se proponen desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca por un lado, las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres y, de otro, garantice la reparación y compensación de las víctimas. El

objetivo es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

2.2.8.1. Ubicación del delito de Femicidio/Feminicidio en el Código Penal internacional

Ubicación de los tipos penales en la ley, según país

Chile	Crímenes y simples delitos contra las personas
Costa Rica	Violencia física
El Salvador	Delitos y sanciones
Guatemala	Delitos y penas
México	Delitos contra la vida y la integridad corporal
Nicaragua	Delitos de violencia contra las mujeres
Perú	Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud

2.2.8.2. Tipicidad

Según, Zaffaroni, (2008) es la característica que tiene una conducta en razón de estar adecuada a un tipo penal, es decir individualizada como prohibida por un tipo penal.(p.455).

2.2.8.3. Pena

La pena es una consecuencia del delito tiene como presupuesto lógico la imputación penal de un hecho antijurídico a un sujeto culpable, sin embargo resulta pertinente precisar que la imposición de la pena no tiene lugar al estilo de las leyes causales mediante una aplicación automática desprovista de toda intervención humana sino que también aquí entran en consideración cuestiones de carácter valorativo para decidir la procedencia y cuantía de la reacción (García, 2012).

La pena para el delito de femicidio, según país.

Chile	Presidio en su grado mayor a presidio perpetuo calificado
Costa Rica	Prisión de 20 a 35 años, e inhabilitación de 1 a 12 años
El Salvador	Prisión 20 a 35 años Figura agravada: Prisión 30 a 50 años

Guatemala	Prisión de 25 a 50 años
México	Prisión de 40 a 60 años, y de 500 a 1000 días multa Pérdida de derechos con relaciona la víctima, incluidos los de carácter sucesorio
Nicaragua	Prisión de 15 a 20 años cuando el hecho se diera en el ámbito público. Prisión de 20 a 25 años cuando el hecho ocurre en el ámbito privado Si concurren dos o más de las circunstancias mencionadas en el artículo, se debe aplicar la pena máxima. Las penas se aumentan en un tercio si concurre algunas de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de 30 años de prisión
Perú	Artículo 1. Modificación del artículo 107 del Código Penal Modifíquese el artículo 107 del Código Penal, "Artículo 107.- Parricidio. Artículo 2. Incorporación del artículo 108-B al Código Penal Incorpórase el artículo 108-B al Código Penal, en los siguientes términos: "Artículo 108-B.- Feminicidio Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal" en cualquiera de los siguientes contextos: 5. Violencia familiar. 6. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 7. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. 8. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 9. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 10. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 11. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 12. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 13. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad.

	<p>14. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana.</p> <p>15. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.</p> <p>16. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente.</p> <p>Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda</p>
--	--

2.2.8.4. Legislación en Guatemala.

El delito, objeto de estudio se contempla en Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22-2008, Capítulo IV Delitos y penas, Artículo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de acción pública.

Artículo 6. Femicidio. *Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:*

- a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
- b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.

- c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
- d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
- e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
- f. Por misoginia.
- g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
- h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal.

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.

2.2.8.5. Legislación en Méjico

El delito en mención está contemplado en Código Penal Federal, y descrito en el Capítulo V Femicidio, Artículo 325.

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Últimas reformas publicadas DOF 14-06-2012

2.2.8.6. Legislación en Costa Rica.

Ley de penalización de violencia contra las mujeres N° 8589, Título II Delitos Capítulo I Violencia Física, Artículo 21. Femicidio

“Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.

2.2.8.7. Legislación en el Salvador.

El delito estudiado está contemplado en la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, Título II, Delitos y sanciones, Art. 44. Delitos de acción pública. Todos los delitos contemplados en el presente capítulo son de acción pública. Art. 45. Feminicidio

“Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años”.

Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.
- b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.
- c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género.
- d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual.
- e) Muerte precedida por causa de mutilación.

Art. 46. Femicidio Agravado

El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos:

- a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad.
- b) Si fuere realizado por dos o más personas.
- c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.
- d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufre discapacidad física o mental.
- e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo.

Art. 48. Suicidio Femicida por Inducción o Ayuda

Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años:

- a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ley ó en cualquier otra ley.
- b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ó en cualquier otra ley.
- c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.

2.2.8.8. Legislación en Chile.

El delito estudiado está contemplado en el Código Penal, descrito en el Artículo 390. Que a la letra dice: *“El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”*.

Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio.

2.2.8.9. Legislación en Nicaragua

Ley N° 779 , Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la ley N° 641, “Código penal ” Título I, Disposiciones y principios generales, Capítulo I Del objeto, ámbito y políticas, Título II de los Delitos y de las penas. Capítulo único. Delitos de violencia contra las mujeres y sus penas. Art. 9 Femicidio:

Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;
- b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela;
- c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima;
- d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo;
- e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación;
- f) Por misoginia;
- g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima;
- h) Cuando concorra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.

Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicará la pena máxima.

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio cuando concorra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de treinta años de prisión.

2.2.9. Jurisprudencia

2.2.9.1. Jurisprudencia nacional

Nuestra legislación acogió por primera vez el delito de feminicidio el 2011, en el artículo 107º del Código Penal, modificado por Ley 29819. Esta tipificación, sin embargo, se limitó a cambiar la nomenclatura del parricidio, lo que “no constituyó un mecanismo eficaz para la protección de las mujeres”. Sería recién hacia el 2013 que se ampliarían los supuestos del feminicidio, al entrar en vigencia la Ley 30068, que incorporó al Código Penal el artículo 108º-A y modificó los artículos 107º, 46º-B y 46º-C de este texto legal.

El 13 de julio del 2018 se publicó La Ley N° 30819 que aprobó la modificatoria de ley de Feminicidio en cuanto la Pena, el mínimo de 15 años pasó a ser de 20 años. (...).

- a) Sentencia del Tribunal Constitucional 10107-2005-PHC/TC
- b) Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0048-2004-PI/TC, fojas 10.
- c) Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 02273-2005-PHC/TC, fojas 9, publicado el 13/10/06.
- d) Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 045-2004-PI/TC, fojas 20.
- e) Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0606-2004-AA/TC, fojas 10 y 11.

2.2.9.2. Jurisprudencia internacional

La legislación latinoamericana que ha penalizado en un tipo penal especial el femicidio/feminicidio es de reciente promulgación. La ley de mayor edad es la costarricense, vigente a partir de mayo de 2007 seguida de la de Guatemala, vigente a partir de mayo de 2008. La de Chile entró en vigencia en diciembre de 2010, las de Perú y El Salvador, son anteriores a la de México y Nicaragua.

Consecuencia lógica de ello es que no exista en los siete países un vasto desarrollo jurisprudencial sobre el tema.

A continuación se mencionan algunas resoluciones judiciales que fueron analizadas en su debido momento:

- a) Chile. Tribunal Oral Penal de Villa Rica. Sentencia del 10 de diciembre de 2011.
- b) Costa Rica. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1416-2010
- c) Guatemala. Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 13-2011 del 08/07/2011
- d) Méjico, Tribunal Constitucional de México. (Sentencia 81-1982 del TC de México del 21 de Diciembre 1982)

El Tribunal Constitucional de México otorgó el amparo al actor, aceptando la existencia de discriminación respecto al varón al no entender justificadas, en la actualidad, las normas protectoras de la mujer que organizan de forma distinta el trabajo nocturno del personal femenino y del personal masculino, pese a no existir diferencia alguna en la cualificación laboral:

“...Dado el carácter social y democrático del Estado de Derecho que nuestra Constitución erige y la obligación que al Estado imponen los artículos 9, 2 y 35 de la Constitución de promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas y la promoción a través del trabajo, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón del sexo, debe entenderse que no se puede privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas. De esta manera, en el presente caso no debe restablecerse la igualdad privando al personal femenino de los beneficios que en el pasado hubiera adquirido, sino otorgando los mismos al personal masculino que realiza idénticos trabajos y actividad profesional...” (Sentencia 81-1982 del TC de México del 21 de Diciembre 1982)

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y Diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

La investigación es cuantitativa y responde al enfoque empirista, positivista porque parte de la teoría, la cual es utilizada para analizar, entender y explicar la realidad del problema.

3.1.2. Diseño de investigación

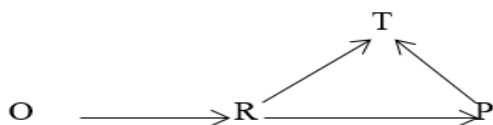
El diseño es no experimental

Desde el punto de vista del alcance temporal es transversal o transeccional porque se tomarán datos en un solo momento

Desde el punto de vista de los objetivos es aplicada y propositiva.

Aplicada: Porque .investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad.

Propositiva: Porque se presenta una propuesta sobre derecho a la igualdad.
Cuyo esquema es el siguiente:



Dónde:

O: Observador (investigador)

R: Realidad problemática

T: Base teórica

P: Propuesta.

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

La población estuvo constituida por 20 individuos distribuidas en la siguiente manera: 4 jueces penales, 4 fiscales, 12 abogados penalistas del Distrito Judicial de Lambayeque 2016

3.2.2. Muestra

Se tomó como muestra al total de la misma. La selección se hizo por conveniencia

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1. Técnicas

3.3.1.1. Técnicas de campo

3.3.1.1.1. La Observación.

En opinión de Villegas, Marroquín, Del Castillo y Sánchez (2010) Es un proceso de abstracción que realiza el investigador, respecto de un hecho, objeto o fenómeno de estudio o preocupación con el objeto de determinar sus características, elementos, desarrollo, relaciones y contradicciones que se dan a su interior. (p.135).

3.3.1.1.2. La Entrevista

Según Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013). Es una especie de conversación formal entre el investigador y el investigado, entre el entrevistador y entrevistado, o informante, consiste en formular preguntas en forma verbal con el objetivo de obtener respuestas o informaciones y con el fin de verificar o corroborar las hipótesis de trabajo. (p.183).

3.3.1.1.3. El Análisis de contenido

Según Ruiz, (2012) es una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los escritos. (p.192).

3.3.1.2. Técnicas de gabinete:

Permitió recoger toda información de manera sistemática y organizada. Una vez ordenada, tabulada y elaborada la información recogida, se hizo necesaria su presentación en forma sistemática. Para ello se contó con cuatro procedimientos diferentes: representación escrita, semitabular, tabular y en figuras.

3.3.1.2.1. El fichaje

Es una técnica de gabinete que permite fijar información extraída de fuentes primarias y secundarias, utilizadas para consignar información útil para los antecedentes, la construcción del marco teórico así como para la base teórica científica. Palomino, Peña, Zevallos, y Orizano.(2015).

3.3.2. Instrumentos

Se utilizaron los siguientes instrumentos:

3.3.2.1. La Ficha o Guía de observación.

Es un instrumento que; empíricamente permite obtener mayor información acerca del objeto de estudio.

3.3.2.2. La Ficha o Guía de entrevista.

Según Ñaupas, et al. (2013) Es el instrumento, la herramienta que sirve a la técnica de la entrevista y es una hoja impresa o no, que contiene las preguntas a formular al entrevistado en una secuencia determinada (p186).

Se aplicó a los magistrados, abogados y víctimas.

3.3.2.3. La Ficha de análisis de contenido

Fueron sujeto de análisis documental las leyes, jurisprudencia y la doctrina.

3.3.2.4. Fichas

Son formatos de papel o cartulina de ciertas características o medidas, donde el investigador anota la información recolectada.

Entre ellas tenemos

Fichas bibliográficas: Permiten fijar información extraída de fuentes primarias y secundarias. Se clasifican en:

Ficha de Resumen: Se utilizó para sintetizar los contenidos teóricos de las fuentes primarias o secundarias que sirvieron como marco teórico de la investigación.

Ficha Textual: Transcribieron literalmente contenidos de la versión original. Se usó para consignar aspectos puntuales de la investigación como marco conceptual, principios de la investigación, etc.

Ficha de Comentario: Representa el aporte del lector o investigadores. Es la idea personal que emite el lector de una lectura o experiencia previa. Se utilizó para comentar los cuadros estadísticos y los comentarios de los antecedentes.

3.4. Análisis estadístico de datos

Se empleó el paquete estadístico Megastat versión .24

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

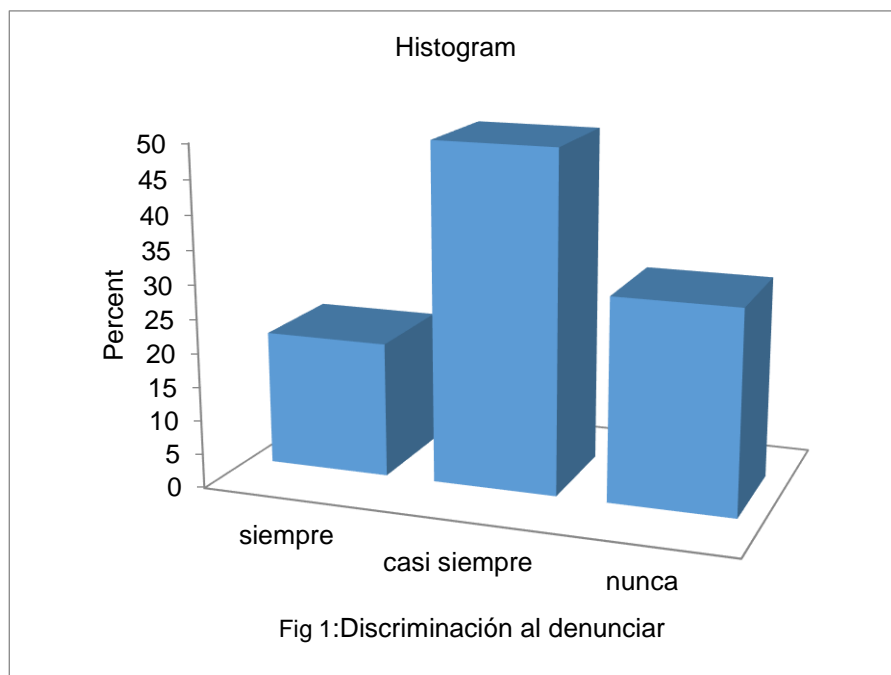
4.1. Análisis e Interpretación de Resultados.

4.1.1. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla N° 1 discriminación hacia los hombres víctimas en Violencia Familiar al tratar de denunciar.

<i>Discriminac</i>	<i>frequency</i>	<i>percent</i>
siempre	4	20.0
casi siempre	10	50.0
nunca	6	30.0
	20	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a comunidad jurídica
Fecha: Marzo 2018



Fuente: Tabla 1

4.1.1.1. Interpretación:

Se observa que; del total de personas encuestadas, un número de 10, que representan el 50. % respondieron que casi siempre existe discriminación hacia los hombres víctimas en Violencia Familiar al tratar de presentar denuncias, 6 de ellos, que representan 30 % dicen que nunca, mientras que 4 encuestados que representan un 20 % afirman que los hombres siempre están sujetos a discriminación.

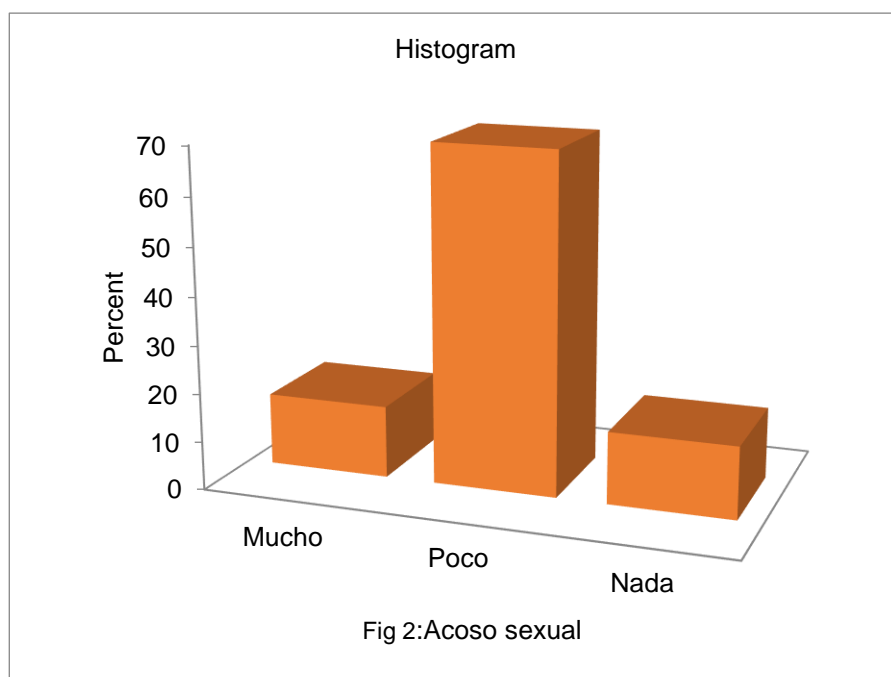
4.1.2. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla N° 2 Acoso sexual que sufren los hombres en relación a las mujeres

Acoso sexual	<i>frequency</i>	<i>percent</i>
Mucho	3	15.0
Poco	14	70.0
Nada	3	15.0
	20	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a la comunidad jurídica

Fecha: marzo 2018



Fuente: Tabla 2

4.1.2.1. Interpretación:

Se observa que; del total de encuestados 14, de ellos que representan el 70. % del total de la población, respondieron que los hombres sufren poco acoso sexual con relación a las mujeres, mientras que, 3 de ellos, que representan 15 % afirman que los hombres sufren mucho acoso y otros 3 individuos que representan otro 15% afirman que los hombres no sufren acoso.

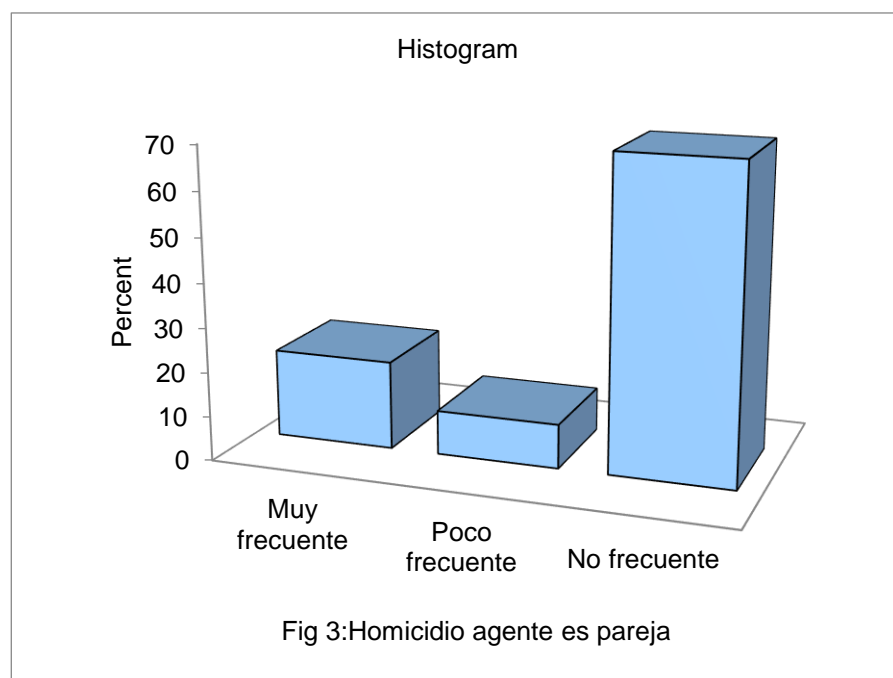
4.1.3. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla N° 3 Homicidio contra un hombre cuyo agente es su pareja

Homicidio		
	<i>frequency</i>	<i>percent</i>
Muy frecuente	4	20.0
Poco frecuente	2	10.0
No frecuente	14	70.0
	20	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a la comunidad jurídica

Fecha: marzo 2018



Fuente: Tabla 3

4.1.3.1. Interpretación:

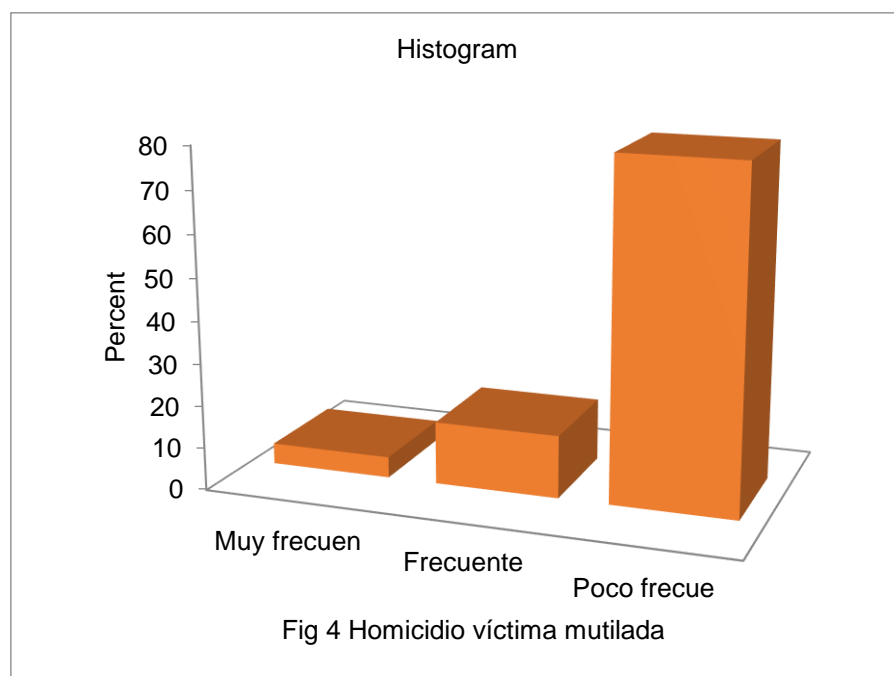
Se observa que; un número de 14 personas encuestados que representan el 70. % respondieron que no es frecuente el homicidio contra un hombre cuyo agente es su pareja, mientras que 4 de ellos, que representan 20 % responden que es muy frecuente y 2 encuestados que representan un 10 % afirman que es poco frecuente.

4.1.4. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla N° 4 Homicidio contra un hombre cometido por su pareja, en el que el agente mutiló a la víctima.

Mutilación		
	<i>frequency</i>	<i>percent</i>
Muy frecuen	1	5.0
Frecuente	3	15.0
Poco frecue	16	80.0
	20	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a la comunidad jurídica
Fecha: marzo 2018



Fuente: Tabla 4

4.1.4.1. Interpretación:

Se observa que; un número de 16 personas encuestados que representan el 80. % respondieron que es poco frecuente que el homicidio contra un hombre cometido por su pareja, en el que se mutiló a la víctima, 3 de ellos, que representan 15. % dicen que es frecuente mientras que un número de 1, que representan un 5 % afirman que es muy frecuente.

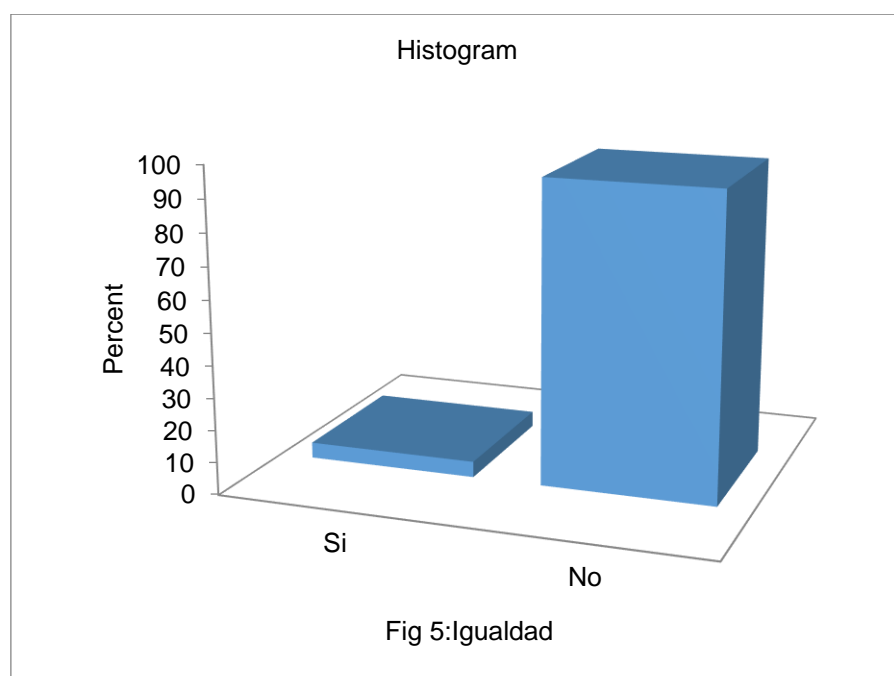
4.1.5. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla N° 5 Igualdad ante la Ley para el grupo LGBT respecto a penas de homicidio en comparación al feminicidio

<i>Igualdad</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percent</i>
Si	1	5.0
No	19	95.0
	20	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a la comunidad jurídica

Fecha: marzo 2018



Fuente: Tabla 5

4.1.5.1. Interpretación:

Se observa que; 19 personas encuestados que representan el 95 % respondieron que no existe Igualdad ante la Ley para el grupo LGBT respecto a penas de homicidio en comparación al feminicidio, 1 de ellos, que representan 5 % afirman que si existe.

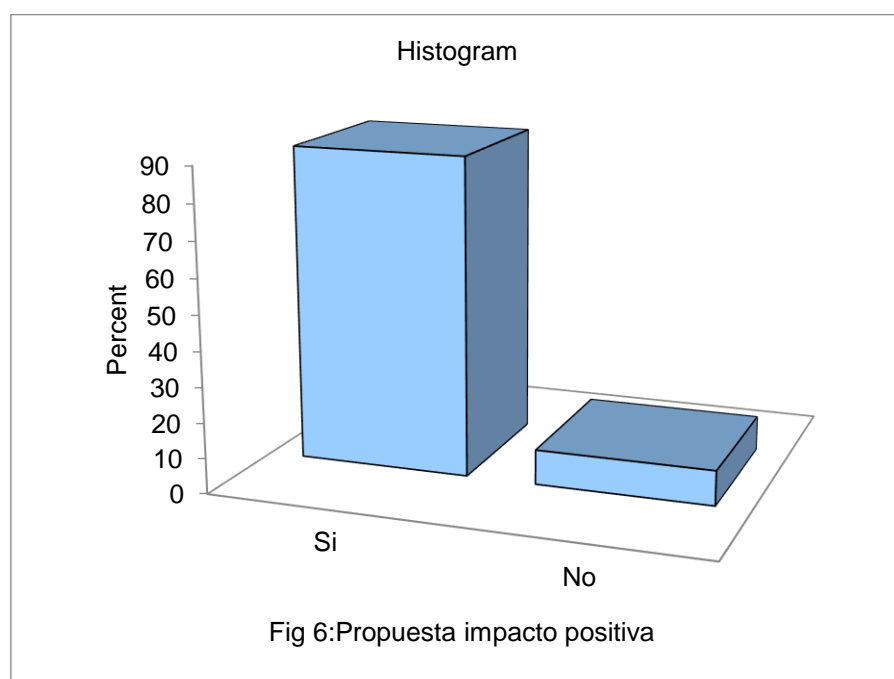
4.1.6. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla N° 6 Propuesta modificatoria que brinda igualdad al hombre, respecto a la pena impuesta por feminicidio.

<i>Propuesta</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percent</i>
Si	18	90.0
No	2	10.0
	20	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a la comunidad jurídica

Fecha: marzo 2018



Fuente: Tabla 6

4.1.6.1. Interpretación:

Se observa que; 18 personas encuestados que representan el 90.% respondieron que la propuesta presentada, si tendría impacto positivo, mientras que un 2% afirma que no.

4.2. Discusión de resultados

Presentada, analizada e interpretada en tablas estadísticas la información recogida a través de diferentes técnicas e instrumentos se obtuvo los resultados globales del presente trabajo de investigación los cuales están en función a los objetivos específicos redactados, la jurisprudencia internacional y la teoría sustentada:

En cuanto a los *objetivos investigados*, en la figura 1 se observa que; del total de individuos encuestados, un número de 10, que representan el 50. % respondieron que casi siempre existe discriminación hacia los hombres víctimas en Violencia Familiar cuando quieren presentar denuncias, 6 de ellos, que representan 30 % dicen que nunca, mientras que 4 estudiantes que representan un 20 % afirman que siempre están sujetos a discriminación. Este hecho representa vulnerabilidad al principio de igualdad, como bien dice Polainos (2005) Por negar a los hombres la posibilidad de hacer uso de la protección penal que se otorga sólo a las mujeres en tanto en cuanto sólo éstas pueden ser sujeto pasivo del delito.

En la figura 2 se observa que, del total de encuestados 14, de ellos que representan el 70. % del total de la población, respondieron que los hombres sufren poco acoso sexual con relación a las mujeres, mientras que, 3 de ellos, que representan 15 % afirman que los hombres sufren mucho acoso y otros 3 individuos que representan otro 15% afirman que los hombres no sufren acoso. Se puede afirmar entonces que si existe acoso del hombre por parte de la mujer, lo que ocurre es que este se invisibiliza por el hecho mismo de que vivimos en una sociedad machista.

En la figura 3, se observa que, un número de 14 personas encuestados que representan el 70. % respondieron que no es frecuente el homicidio contra un hombre cuyo agente es su pareja, mientras que 4 de ellos, que representan 20 % responden que es muy frecuente y 2 encuestados que representan un 10 % afirman que es poco frecuente. Es evidente que el porcentaje de homicidio que

sufren los hombres no está en relación con el que sufren las mujeres, sin embargo existe y; también el quantum de la pena para la mujer que mata al hombre debe ser la misma que para él.

En Figura 4, Se observa que; un número de 16 personas encuestados que representan el 80. % respondieron que es poco frecuente que el homicidio contra un hombre cometido por su pareja, en el que se mutiló a la víctima, 3 de ellos, que representan 15. % dicen que es frecuente mientras que un número de 1, que representan un 5 % afirman que es muy frecuente.

En figura 5 Se observa que; 19 personas encuestados que representan el 95 % respondieron que no existe Igualdad ante la Ley para el grupo LGBT respecto a penas de homicidio en comparación al feminicidio, 1 de ellos, que representan 5 % afirman que si existe. En cuanto la propuesta presentada, 90.% de encuestados respondieron que la propuesta presentada, si tendría impacto positivo, mientras que un 2% afirma que no. Este hecho avala la propuesta.

En discusión con la **jurisprudencial internacional**, con respeto al varón, concuerda con la Sentencia 81-1982 TC México. Que a la letra dice:

El Tribunal Constitucional de México otorgó el amparo al actor, aceptando la existencia de discriminación respecto al varón al no entender justificadas, en la actualidad, las normas protectoras de la mujer que organizan de forma distinta el trabajo nocturno del personal femenino y del personal masculino, pese a no existir diferencia alguna en la cualificación laboral.

“...Dado el carácter social y democrático del Estado de Derecho que nuestra Constitución erige y la obligación que al Estado imponen los artículos 9, 2 y 35 de la Constitución de promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas y la promoción a través del trabajo, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón del sexo, debe entenderse que no se puede privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas. De esta manera, en el presente caso no debe restablecerse la igualdad privando al personal femenino de los beneficios que en el pasado hubiera adquirido, sino otorgando los mismos al personal masculino que realiza idénticos trabajos y actividad profesional...”

En discusión con la base teórico científica podemos decir que se encuentra en concordancia y congruencia con las teorías criminológicas modernas, *la teoría del dominio del hecho* de Roxin, la cual se reconoce como teoría dominante de la autoría y la participación. Con lo sustentado por Polainos, _(2005), al manifestar “la conducta es la misma y el Derecho penal debe aplicar la igualdad”. Porque se estaría dando más importancia a vulneraciones a los derechos fundamentales de las mujeres que a los de los hombres.

En cuanto las teorías del desarrollo humano, *el Humanismo* cuyo objeto de estudio es el Yo, y el desarrollo pleno de las cualidades esenciales de la persona en búsqueda de la autorrealización.

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en virtud del artículo 3, común a ambos, aseguran a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en esos documentos.

4.3. Propuesta

4.3.1. PROPUESTA LEGISLATIVA.

4.3.1.1. Introducción

Cierto es que; a través de la historia de la humanidad la mujer ha estado siempre desprotegida en sus más elementales derechos, y es a través de grandes luchas que consiguió victorias. En Perú, es la Ley de Feminicidio, Ley N° 30068; la cual pretende normar estos derechos frente a la legislación internacional, no obstante, creemos que este derecho ganado, vulnera el principio de igualdad del hombre frente a la mujer, por lo que si analizamos empíricamente la realidad, observamos que los hombres también son víctimas de homicidio, o de violencia familiar, en su mayoría por su opción sexual no heterosexual.

Es de vital importancia que las normas legislativas se adapten a la realidad objetiva, por lo cual se propone modificar al artículo 108-B del código penal en su denominación y el inciso 4° del mismo artículo.

4.3.1.2. Propuesta de modificación del Artículo 108-B Femicidio, del Código Penal Peruano.

Para ello se analizaron los objetivos normativos en el artículo 108-B Femicidio y, la propuesta modificatoria recae sobre la denominación del artículo 108-B y su artículo 4°.

La denominación de artículo 108-B dice:

Artículo 108-B Femicidio.

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer u por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.

La pena privativa de libertad será no menor de treinta años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad;
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación;
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente;
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación;
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad;

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o niños, niñas adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.
9. Si el agente se encuentra en estado de ebriedad o 0.25 gr litro alcohol o bajo efecto de drogas (...) . La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.”

Con la propuesta debe decir:

Artículo 108-B Atentado contra la vida por razón de género

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer u hombre por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;

El Inciso 4° Dice:

4. Cualquier forma de discriminación *contra la mujer*, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.

Debe decir:

4. Cualquier forma de discriminación de *género y por la opción sexual de la víctima* de que haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente

La pena privativa de libertad será no menor de treinta años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad;
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación;
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente;

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.

CONCLUSIONES

Se elaboró y presentó la propuesta a un congresista representante de la región de Lambayeque, para que previa evaluación, sea elevada y presentada en el congreso.

De la información recolectada a través de los instrumentos, se afirma que si existe vulneración del principio de igualdad, en la normatividad expresada en el artículo 108-B de la Ley N° 30068 contenida en el Código Penal Peruano, respecto a los derechos del varón, los cuales están amparados por distintos herramientas jurídicas nacionales e internacionales.

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en virtud del artículo 3, común a ambos, ya que aseguran a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en esos documentos.

Conforme a la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° queda manifiesta tal orientación al reconocerse que *“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”*.

Las opiniones de los abogados litigantes, jueces, fiscales, expresadas a través de los instrumentos de recojo de datos *arrojan resultados que están en discordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos* Art. 1,2,7, 23, que a la letra dice: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.(...)Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.(....)*Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.(...)..Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta*

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Todo personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,...). Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Lo anteriormente expresado se observa que colisiona con los resultados de la primera pregunta sobre discriminación hacia los hombres; del total de personas encuestadas, un número de 10, que representan el 50. % respondieron que casi siempre existe discriminación hacia los hombres víctimas en Violencia Familiar al tratar de presentar denuncias, 6 de ellos, que representan 30 % dicen que nunca, mientras que 4 encuestados que representan un 20 % afirman que los hombres siempre están sujetos a discriminación.

De igual manera en los resultados de la figura 5 se observa que 19 personas encuestadas que representan el 95 % respondieron que no existe Igualdad ante la Ley para el grupo LGBT respecto a penas de homicidio en comparación al feminicidio.

También están en discordancia con el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales Art. 2, 3, 7, y 13, el cual literalmente dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, *sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión*, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.(...). Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.(....). Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.... Igual oportunidad para todos de ser promovidos,.(...). Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación...”

Así mismo están en discordancia con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Art. 2, 3, 14, “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.(...). Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo.(...). Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.(...). Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.(...).

Esta problemática ocurre de acuerdo a Polainos (2005), fundamentalmente por los siguientes motivos:

Por negar a los hombres la posibilidad de hacer uso de la protección penal que se otorga sólo a las mujeres en tanto en cuanto sólo éstas pueden ser sujeto pasivo del delito.

-Por impedir que los hombres puedan usar los juzgados de violencia sobre la mujer.

Estas críticas responden, como dice Laurenzo (2008) a que el Derecho penal parte de falsos universalismos patriarcales, donde prima la igualdad formal y no se tiene en cuenta el contexto, por lo que parece lógico que se planteen críticas porque se trata de reformas que son extrañas al sistema penal.

Se vive en una realidad silenciada en cuanto a discriminación del hombre, debemos hablar de la ley como una ley que no ha querido encarar la violencia familiar que comprenda y tipifique todos los maltratos que se da en el hogar, sin distinguir el sexo de la víctima.

Se considera que; con la propuesta modificatoria del artículo mencionado, se mantiene lo ganado en la lucha de la mujer en búsqueda de reconocimiento de sus Derechos Fundamentales, no se la deja desprotegida, por el contrario se extiende *equitativamente* a los hombres, buscando respetar el Principio de Igualdad ante la ley de aquellos que pudieran ser víctimas del mismo tipo de homicidio, en especial de quienes que, por su opción sexual, son víctimas de igual manera del machismo inherente en la sociedad patriarcal en la que vivimos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda aceptar la propuesta legislativa, e imponer a quien mate a los hombres, la misma pena que a la mujer por la realización de comportamientos que son los mismos y la afectación del bien jurídico que es también el mismo. Como sostiene Polainos (2005), “la conducta es la misma y el Derecho penal debe aplicar la igualdad”.

Se fundamenta lo dicho porque se estaría dando más importancia a vulneraciones de los derechos fundamentales de las mujeres que a los de los hombres, contraviniendo de esta manera los diversos y múltiples tratados de derechos humanos, entre ellos los de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice:

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.(...)..Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (...).

Por tanto, no existe una razón de peso para fundamentar una mayor gravedad del bien jurídico máspreciado la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Amnistía Internacional (2004) *Está en nuestras manos. No más violencia contra las mujeres*, Editorial Amnistía Internacional – EDAI,
- Arroyo., L., Gómez de la Torre, I., Arroyo, L, y Ferré, J.C.(1996) *Lecciones de Derecho penal, Parte general..* Barcelona, Praxis (p.250).
- Añón, M., Mestre, R.,(2009) “Violencia sobre las mujeres: discriminación, subordinación y Derecho”, en Boix, J., Martínez, E., (Coord.), *La nueva Ley contra la violencia de género* (LO 1/2004, de 29 de diciembre), op. cit.,(p. 49).
- Barrere, M.,(2004) *De la acción positiva a la discriminación positiva en el proceso legislativo español, Jueces para la democracia*, Nº. 51, (p. 29).
- Barnett, H., (1998) *Introduction to feminist jurisprudence*, Cavendish Publishing Limited, London, (p.13).
- Beltrán E.,(s/) *Las dificultades de la igualdad y la teoría jurídica contemporánea*, en Ortega, M., Sánchez, C., Valiente, C., (Comp.), *Género y ciudadanía*, op. cit., (pp.105-108).
- Bernal,T.C.(2006) *Metodología de investigación para Administración Económica, Humanidades y Ciencias Sociales*. México Editorial Pearson.
- Bodelón, E.,(2008) “La limitada perspectiva de género en la sentencia del Tribunal Constitucional STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008, cuestión de inconstitucionalidad del art. 153.1 Código Penal (en su redacción vigente, resultante de la LO 1/2004, de 28 de diciembre)”, en Nicolás, G., Bodelón, E., (Comp.), *Género y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder*, op. cit., (p.249).
- Carcedo, A., y Sagot.,M., (2000) *Femicidio en Costa Rica, 1990-1999*, Organización Panamericana de la Salud-Programa Mujer, Salud y Desarrollo, San José, (p.11).
- <http://www.paho.org/Spanish/Hdp/HDW/femicidio.pdf>
- Carcedo, A. (2005). Presentación realizada en Ciudad de Guatemala. Disponible en:

http://amdh.org.mx/mujeres_ORIGINAL/menu_superior/Feminicidio/5_Otros_textos/7/capitulosdesglosados/Elementos_discusion_juridica_concepto.pdf

Chejter, S (2005), *Femicidios e impunidad*, Centro de Encuentros Cultura y Mujer, Argentina,(p.10)

http://www.cecym.org.ar/investigacion.shtml?sh_itm=bc92d41a6c337563c3989159ccf017a6;

Cladem (2008) *Feminicidio. Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana*, Lima, (p.10)
<http://www.cladem.org/espanol/regionales/Violenciadegenero/Docs/feminicidio2/feminicidio%20vf2.pdf>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL – 24 de noviembre del 2015) *Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe*, recuperado de:

<https://www.cepal.org/.../cepal-advierte-elevado-numero-femicidios>.

Convención Belém Do Pará.(1996) Aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N° 26583 de 22 de marzo de 1996.

Copello, P. (2006) La Violencia De Género. *En La Ley Integral Valoración político-criminal*. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y derechos humanos de los migrantes indocumentados. Párrafo 55 de la Opinión Consultiva OC-18/03.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Párrafo 57 de la Opinión Consultiva OC-4/84.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),(2007) El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 de enero de 2007

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo 1

Defensoría del Pueblo(2015) Femicidio Íntimo en el Perú: Análisis de Expedientes Judiciales (2012 -2015) Serie Informes Defensoriales: Informe N° 173-2015-DP.

Del Piélagó (2012) Método de caso jurídico: *El feminicidio. Expediente n° 03837-2012-CSJL-Lima caso : Lidia Maribel Mendoza Ríquez*

Dominguez, I.(2009) *La protección penal reforzada de la mujer en la ley integral contra la violencia de género y el principio de igualdad*, La Ley Integral: un estudio multidisciplinar, Madrid: Dykinson,(pp. 311-314).

Facchi (2005) *El pensamiento feminista sobre el Derecho*. Un recorrido desde Carol Gilligan a Tove Stang Dahl , Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, N°. 3, (p. 28).

Ferrante, M. (1998) Una introducción a la teoría de la imputación objetiva. En *Teoría de la imputación objetiva*. Cancio, M. Meliá y Marcelo Sancinetti (coordinadores). Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho.(p.91).

Fregoso,R. y Bejarano,C. (2010) Terrorizing women: *Femicide in the Americas*, Duke University Press, USA, (p.5).

García, P. (2012). *Derecho Penal: Parte General*. (2da. Ed.). Lima: Jurista Editores

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, L., (2010). *Metodología de la Investigación Científica*. México: Mc Graw Hill.

IIDH/CCPDH, I Informe Regional (2006): *Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana*, San José, (p. 33)

<http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/>

Documentos/BD_1896785571/InformeFemicidio/I%20Informe%20Regional%20Femicidio.pdf.

Jakobs, G., (1996) *La autoría mediata con instrumentos que actúan por error como problema de la imputación objetiva*. Bogotá: Universidad Externado

de Colombia. Centro de investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho.

Jurista editores (2013) *Nuevo Código Penal*, Lima

Laporta (2012) El feminismo/ feminicidio: Reflexiones desde el feminismo jurídico.

(Tesis de Maestría Universidad de Carlos III de Madrid) Recuperada de.

Lagarde, M, (2009) *caso González y otras vs. México*, Corte Interamericana de Derechos Humanos.Disponible en: <http://aquiescencia.net/2011/05/02/marcela-lagarde-y-lainvencion-de-la-categoria-feminicidio/>

Lagarde, M. (2008) “Antropología, feminismo y política: *Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres* , en Bullen, M., y Diez C., (Coord.), Retos teóricos y nuevas prácticas, Ankulegi Antropologia Elkartea, España, (p. 217)

Lagarde, M., (2009) Antropología, feminismo y política: *Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres*, en Bullen, M., y Diez C., (Coord.), Retos teóricos y nuevas prácticas, op. cit.,(p. 216).

Laurenzo, P., Maqueda, M., Rubio A.,(2008) (Coord.), *Género, Violencia y Derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia,(pp. 32-33).

La República (9 de marzo de 2017) : *Balance de violencia contra la mujer 946, feminicidios en 8 años.*

Lisardi (8 de marzo del 2013)

Mendoza, L.M. , y de Piélagos,W., E..

Ministerio Público (2016).Fiscalía de la Nación. recuperado de www.mpfm.gob.pe/lambayeque/

Munevar, D. I. (2012) Delito de femicidio. *Muerte violenta de mujeres por razones de género*. Universidad Nacional de Colombia.

Naciones Unidas (2006) Los principales tratados internacionales de derechos humanos: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos.

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., y Villagómez, A. (2013). *Metodología de la Investigación Científica y Elaboración de tesis*. Lima: UNMSM

Observatorio de la Criminalidad (2017) *Distrito Fiscal de Lambayeque*
portal.mpf.n.gob.pe/boletin informativo/informacion general,

Palomino, J. A . , Peña, J. D., Zevallos, G. ,y Orizano. L. A. ,
(2015), *Metodología de la investigación*. Lima: San Marcos

Radio Programas del Perú, (14 de Octubre del 2014) entrevista a Calderón, R. especialista en temas de desarrollo.

Ramos de Mello, A () *Feminicidio : Un análisis criminalístico-Jurídico de la violencia contra las mujeres*.

Ruiz, J., I.,(2012) *Metodología de la Investigación Cualitativa*, Bilbao:
Universidad de Deusto.

Russel (1992) *The Politics of Woman Killing*, Twayne Publishers, New York,
(P.14).

Roxin, C (1970) *Política Criminal y Sistema del Derecho Penal*.

Sentencias del Tribunal Constitucional 0618-2005-PHC/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional 10107-2005-PHC/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0048-2004-PI/TC, fojas 10.

Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 02273-2005-PHC/TC, fojas 9,
publicado el 13/10/06.

Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 045-2004-PI/TC, fojas 20.

Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0606-2004-AA/TC, fojas 10 y 11.

Sentencia 81-1982 del TC de México del 21 de Diciembre 1982.

Suarez,M.,L.,(2002) Teoría feminista, política y Derecho, Dykinson, Madrid, (p. 171).

Talavera (2009) *La Prueba en el Nuevo Proceso Penal: Manual del Derecho Probatorio y de la valorización de las pruebas en el Proceso Penal Común*. Lima: Academia de la Magistratura.

Toledo, P (2009) *Feminicidio*, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

UNIFEM.(2015) *Violence against women – facts and figures*. En:
[http://www.unifem.org/attachments/
gender_issues/violence_against_women/facts_figures_violence_against
_women_2007.pdf](http://www.unifem.org/attachments/gender_issues/violence_against_women/facts_figures_violence_against_women_2007.pdf). Consulta: 19 de mayo del 2015

Villavicencio, F. (2010). *Derecho Penal: Parte General*. (4ta. Ed.). Lima: Grijley.

Villavicencio, F. (2013). *Derecho penal: Parte general (4ta. Ed.)*. Lima, Perú: Grijley.

Villegas,L., Marroquín, R., Del Castillo,V., y Sánchez, R.,(2011) Teoría y praxis de la investigación científica. Lima: San Marcos.

Zaffaroni, E. (2002). *Derecho Penal: Parte General*. Buenos Aires: Depalma

ANEXOS

Anexo 1

CUESTIONARIO

OBJETIVO: Obtener información relacionado la Ley 30068, Ley de Femenicidio y sus implicancias frente al principio de igualdad ante la ley .

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una “x” la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

Marque con una (X) según corresponda con la información del entrevistado:

Abogado litigante ()

Juez ()

Fiscal ()

1. ¿Considera Ud que existe discriminación hacia los hombres víctimas en Violencia Familiar?
A. Siempre B. Casi siempre C. Nunca
2. ¿Qué tanto acoso sexual sufren los hombres en relación a las mujeres.
A. Mucho B. poco C. nada o casi nada
3. Los casos de homicidio contra un hombre cuyo agente es su pareja es:
A. Muy frecuente B poco frecuente B no frecuente
4. El caso de homicidio contra un hombre cometido por su pareja, en el que el agente mutiló a la víctima es:
A. Muy frecuente B poco frecuente B no frecuente
5. ¿Considera Ud.que existe igualdad ante la Ley para el grupo LGBT respecto a penas de homicidio en comparación al feminicidio.?
A. Si B No
6. ¿Considera Ud.que una propuesta modificatoria del art. 108-B Feminicidio, que brinde igualdad al hombre, respecto a la mujer tendría impacto positivo?
A. Si B No

Anexo 2. Tomas Fotográficas a personas entrevistadas





Anexo 3 Noticia periodística.



Una mujer arrojó petróleo e intentó quemar a su pareja en Chiclayo

Cristian Aurazo Peredo de 39 dijo a la Policía que **detuvo a su pareja cuando ya había cogido una caja de fósforos** para prenderle fuego. El incidente se registró en el pueblo joven José Olaya de Chiclayo.

01 de septiembre del 2018 - 8:51 PM



hombre | **Fuente:** RPP/Henry Urpeque

Santos Santamaría viuda de Benites de 54 años roseó petróleo e intentó quemar a su pareja Cristian Aurazo Peredo de 39, este sábado en un incidente registrado en la cuadra 5 de la calle Teresa Fanning en el pueblo joven José Olaya de Chiclayo.

El agraviado llegó hasta la comisaría del Norte para denunciar el hecho. Según confesó ambos discutieron previamente porque ella se enteró que el hombre tenía encuentros con su expareja, madre de su hija.

La mujer primero le arrebató el celular y lo rompió y luego en un descuido le arrojó el combustible. **El hombre la detuvo cuando ella ya había cogido una caja de fósforos para prenderle fuego.**

"Siempre peleábamos, yo había decidido irme de la casa, pero esta vez exagero ,mi hija ha presenciado todo", dijo en la delegación policial.

Cristian además es cantante de dos orquestas de cumbia: "Agua Brava" y "Son Kaliente" y pidió a la Policía medidas de protección para él y su hija.